

COLECCIÓN **BECAS DE INVESTIGACIÓN**

**Estado, democracia
y movimientos sociales**
Persistencias y emergencias en el siglo XXI



CLACSO

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales
Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais

COLECCIÓN BECAS DE INVESTIGACIÓN

Director de la colección - Pablo Vommaro

CLACSO Secretaría Ejecutiva

Karina Batthyány - Directora Ejecutiva

María Fernanda Pampín - Directora de Publicaciones

Pablo Vommaro - Director de Investigación

Equipo Editorial

Lucas Sablich - Coordinador Editorial

Solange Victory y Marcela Alemandi - Producción Editorial

Equipo de Investigación

Cecilia Gofman, Marta Paredes, Natalia Gianatelli,

Rodolfo Gómez, Sofía Torres, Teresa Arteaga,

y Ulises Rubinschik



LIBRERÍA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE CIENCIAS SOCIALES

CONOCIMIENTO ABIERTO, CONOCIMIENTO LIBRE

Los libros de CLACSO pueden descargarse libremente en formato digital o adquirirse en versión impresa desde cualquier lugar del mundo ingresando a www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana

Estado, democracia y movimientos sociales. Persistencias y emergencias en el siglo XXI (Buenos Aires: CLACSO, febrero de 2023).

ISBN 978-987-813-410-9



CC BY-NC-ND 4.0

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales | Queda hecho el depósito que establece la Ley 11723.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

CLACSO. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - Conselho Latino-americano de Ciências Sociais

Estados Unidos 1168 | C1023AAB Ciudad de Buenos Aires | Argentina

Tel [54 11] 4304 9145 | Fax [54 11] 4305 0875 | clacso@clacsoinst.edu.ar |

www.clacso.org



Este material/producción ha sido financiado por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Asdi. La responsabilidad del contenido recae enteramente sobre el creador. Asdi no comparte necesariamente las opiniones e interpretaciones expresadas.

Índice

Agradecimientos	9
Prólogo. Las formas de la protesta actual (y de su estudio en pandemia)	11
<i>María Fernanda Sañudo Pazos, Laura García-Corredor y Ernesto Bohoslavsky</i>	
Jóvenes, democracia y persistencias políticas ante la crisis latinoamericana. Los casos de Ecuador y Bolivia	21
<i>Marco Panchi J. (coord.), Harry Soria Galvarro, Roxana Viruez Valverde y Daniela Villacís Barahona</i>	
Como mujeres que somos. Palabra y discurso en las luchas de las zapatistas y las bartolinas en un contexto de transformaciones sociales ...	73
<i>Lourdes Guadalupe Delgadillo Díaz Leal y Verónica Renata López Nájera</i>	
¿Hacia dónde va la democracia paraguaya? Veinte años de disputas, estrategias y tensiones entre movimientos sociales y élites	161
<i>Abel Irala, Marielle Palau, Juan Carlos Yuste y Sarah Zevaco</i>	
Movimientos sociales y derechas en Paraguay (2015-2016), Brasil (2018-2020) y Colombia (2018-2020)	223
<i>Lorena Soler, Ana Belén Mercado, Mónica Nikolajczuk y Enzo Andrés Scargiali</i>	

Entre el reconocimiento limitado, el racismo de Estado y las violencias género-racializadas. Redes y movilizaciones feministas afrodescendientes en Arica y en Santiago de Chile.....	291
<i>Claudia Parra Aravena, Isabel Araya Morales, Lissien Salazar, Pablo Mardones, Ricardo Amigo Dürre y Yanina Ríos Quinteros</i>	
Movimientos indígena-garífuna. Un estudio de los procesos de resistencia y organización política de los pueblos en el marco de la militarización en Honduras	357
<i>Randolfo García Sandoval y Jéssica Fernández Norales</i>	
En defensa de la agenda. El ajuste de los marcos de acción colectiva en movimientos indígena-campesinos ante contextos de oportunidades políticas cambiantes.....	411
<i>Sofía Cordero, Paúl Cisneros, Elizabeth Huanca y Yuri F. Torrez</i>	
Autonomías territoriales indígenas y campesinas en América Latina. Tensiones, disputas y avances frente a los gobiernos de derecha	463
<i>Lia Pinheiro Barbosa, Oscar Soto, María Isabel González y Édgars Martínez Navarrete</i>	
Sobre los autores y autoras.....	513

Movimientos sociales y derechas en Paraguay (2015-2016), Brasil (2018-2020) y Colombia (2018-2020)

Lorena Soler, Ana Belén Mercado, Mónica Nikolajczuk y Enzo Andrés Scargiali

Introducción

El protagonismo adquirido por los nuevos movimientos sociales (NMS) en la coyuntura latinoamericana actual es innegable. Asimismo, el mapa político de la región muestra una heterogeneidad de gobiernos que evidencia la capacidad de las derechas para torcer la correlación de fuerzas imperante durante el periodo progresista-populista iniciado a principios del presente siglo (Soler, 2021).

Esta realidad convierte en imprescindible una perspectiva que articule una explicación sobre los cambios en el ámbito político-partidario con las transformaciones en el campo popular. En este sentido, el presente artículo presenta un abordaje inédito acerca del vínculo entre NMS y derechas latinoamericanas del siglo XXI o “nuevas” derechas y su incidencia en la emergencia de un nuevo ciclo de movilización en Paraguay, Brasil y Colombia.

Específicamente, nos preguntamos ¿cuál es el rol de los movimientos sociales frente al avance de las nuevas derechas latinoamericanas?

¿Cuáles son las múltiples influencias e intercambios entre los movimientos sociales y las fuerzas de derecha en el ámbito institucional y/o partidario y en los repertorios de acción de los actores subalternos? Estos interrogantes nos permiten indagar en los movimientos sociales como mediadores en la cadena causal de la praxis social (Sz-tompka, 1995) y en su capacidad de influencia en la estructuración y mutación del campo político y del Estado (García Linera, 2010).

Sostenemos que tras el ascenso de los gobiernos de Horacio Cartes (2013-2018) en Paraguay, de Jair Bolsonaro (2018) en Brasil y de Iván Duque (2018) en Colombia, se activa un dispositivo basado en la “acumulación” de luchas previas protagonizado por los NMS y se inicia un nuevo ciclo de movilización social (Tarrow, 1997). Este ciclo se caracteriza por una composición social heterogénea; por la toma del espacio público a partir de la multiplicación de las manifestaciones masivas en las calles, así como por nuevas expresiones a través de las redes sociales tras la pandemia por Covid-19; por una revitalización de la narrativa antineoliberal conjugada con un discurso identitario y, finalmente, por una articulación entre movimientos urbanos y rurales. Así, mientras que en Brasil la protesta social se reactiva ante el discurso excluyente y la avanzada de políticas conservadoras en el gobierno de Jair Bolsonaro, en Paraguay y Colombia las demandas giran en torno a las políticas de ajuste estructural y la violencia estatal y paraestatal.

Concretamente, se analiza el nuevo ciclo de movilización protagonizado por el *Congreso Democrático del Pueblo* contra las leyes de Alianza Público-Privada y de Defensa Nacional y Seguridad Interna en Paraguay (2015-2016); por el movimiento estudiantil *Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior* (ACREES) y por la *Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior* (UNEES) contra el ajuste económico y la violencia del gobierno de Iván Duque en Colombia (2018-2020); y por *#EleNã* y *Brasil pela Democracia e pela Vida* contra el ascenso y las políticas de Jair Bolsonaro en Brasil (2018-2020).

Este original abordaje se robustece con la implementación de una perspectiva novedosa: la Sociología Histórica de tiempo presente. A partir de la misma se reconstruyen las condiciones de surgimiento y emergencia de los NMS y se promueve un abordaje de los actores concretos en coyunturas concretas, desde la contemporaneidad del fenómeno. Asimismo, en tanto la región puede ser comprendida como una unidad en la diversidad (Carrera Damas, 1999) el método comparado se vuelve vital en la construcción de categorías amplias que puedan explicar la especificidad regional de los fenómenos y la particularidad de los casos bajo estudio.

La investigación se divide en cuatro apartados. El primero, explicita la perspectiva metodológica y manifiesta la trayectoria de investigación. El segundo, repone los principales debates sobre los NMS latinoamericanos y abre posibles vectores de análisis sobre el vínculo entre estos y las derechas latinoamericanas. En tercer lugar –y como núcleo principal de este artículo– se aborda empíricamente el problema y se analizan las demandas, la composición social y los repertorios de acción de los movimientos sociales bajo estudio durante los gobiernos de derecha en Paraguay, Brasil y Colombia. Finalmente, se reponen los hallazgos principales de la investigación y se presentan posibles derivas para trabajos futuros.

La constitución de un objeto de estudio: perspectiva, método e instrumentos

Nuestro objetivo es explicar la acción de los NMS en una coyuntura histórica concreta: el ascenso de las derechas latinoamericanas del siglo XXI. Sin embargo, proponemos un análisis que no se instala únicamente en la temporalidad más reciente, sino que, además, indaga en los condicionantes sociohistóricos que intervienen en el desarrollo del nuevo ciclo de movilización. En este sentido, el trabajo aquí presentado es tributario de la Sociología Histórica de tiempo presente como perspectiva de análisis.

La misma posibilita un estudio basado en la intersección de contextos estructurales y experiencias de grupos (Skocpol, 1994) y propone una concepción del tiempo como categoría histórica y como perspectiva metodológica. La propuesta responde a un proyecto de hibridación, donde historia y sociología logran encontrarse sin perder las riquezas de sus propios núcleos disciplinares. En rigor, la Sociología Histórica permite analizar los hechos únicos a partir de la historia dentro de modelos propios de la sociología (Bonnell, 1980).

Entonces, desde la mirada relacional y sociohistórica analizamos a) las dimensiones materiales, culturales e identitarias de la acción colectiva emprendida por los movimientos sociales abordados, dando cuenta de las trayectorias de las organizaciones y la naturaleza de sus demandas para los tres casos; b) las características de las fuerzas de derecha y las políticas neoliberales y represivas promovidas; y c) el vínculo particular entre ambos actores y su incidencia en el nuevo ciclo de movilización.

Asimismo, a través de la metodología comparativa ponderamos rasgos comunes y transversales, así como elementos inherentes a cada uno de los casos abordados, lo cual permite crear un marco interpretativo novedoso al tiempo que nos posibilita descubrir la originalidad de las diferentes sociedades (Bloch, 1992). Para ello se recurrirá a las estrategias comparativas desarrolladas por Tilly (1991): la comparación individualizadora, que posibilita captar las características particulares de cada uno de los casos, y la comparación universalizadora, que tiene como objeto comprender la unidad analítica de los procesos.

Ante la amplitud del fenómeno y la complejidad que representa un estudio comparado como el aquí planteado, hemos realizado un proceso de recolección y sistematización de datos en clave comparada que permite indagar de manera simultánea en los movimientos sociales abordados, tanto en su dimensión coyuntural como histórica. Esto ha hecho posible elaborar dimensiones propias de este nuevo ciclo de movilización que podrían significar un aporte inédito al campo de estudios.

A partir de esta estrategia metodológica planteada, es plausible reconstruir y analizar las trayectorias colectivas con el objetivo de orientar el fenómeno temporal y espacialmente y determinar los objetivos manifiestos y declarados de los movimientos sociales estudiados. En esta labor, se ha hecho hincapié en el contexto sociohistórico de surgimiento y se ha explorado en la naturaleza y alcance de sus principios constitutivos. Asimismo, se ha reconstruido la composición social y analizado los repertorios del nuevo ciclo de movilización, enfocándonos en las organizaciones sociales que integran los movimientos estudiados con el fin de indagar en las diferentes líneas ideológicas que convergen, así como en las distintas modalidades de acción que aporta cada una de ellas.

A partir de este relevamiento pudimos dar cuenta de la original convergencia entre actores sociales que proceden de distintos ámbitos territoriales y socio-culturales y que despliegan distintas consignas políticas. En cuanto a los repertorios de acción, se estudian las más significativas instancias de conflicto con movilización en el espacio público, como también las manifestaciones en las redes sociales. A su vez, la delimitación de estos acontecimientos nos permite reconstruir el carácter y la naturaleza de sus demandas.

El relato de los protagonistas resulta vital para la reconstrucción de trayectorias, repertorios de acción y principios constitutivos de los movimientos sociales. Por ello, se han realizado entrevistas semiestructuradas a líderes sociales que han tenido una participación central en este nuevo ciclo de protesta en Paraguay, Brasil y Colombia. Si bien la pandemia imposibilitó la realización de trabajo de campo presencial y, en algunos casos, los movimientos sociales no cuentan con vías de comunicación fluidas que permitan acceder de forma directa a sus referentes, hemos concretado mediante plataforma digital entrevistas con un dirigente del Movimiento Revolucionario Desde Abajo (MRDAD) y miembro del Congreso Democrático del Pueblo en el periodo 2015-2019 para el caso de Paraguay; con un referente de *#SomosDemocracia* dentro de *Brasil pela democracia e pela vida*; y con una dirigente de la Asociación Colombiana de

Representantes Estudiantiles de Educación Superior (ACREES), y la ex vocera nacional por la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (UNEES).

En esta tarea hemos puesto principal atención en el punto de vista del actor (Descombe, 1999) y hemos recurrido a las técnicas de análisis crítico del discurso (Weiss y Wodak, 2007; Piovani, 2010). Por su parte, atendiendo al carácter comunicacional del fenómeno, se indaga en las manifestaciones públicas de los principales líderes de los movimientos sociales durante las coyunturas críticas estudiadas. La finalidad es dar cuenta del punto de vista de sus protagonistas, del grado de convergencia entre los distintos discursos circulantes y del nivel de institucionalización de estos.

En cuanto a las fuentes, hemos delimitado los canales y medios de comunicación a partir de los cuales los movimientos sociales logran socializar e intercambiar estrategias y miradas con otros actores. En este sentido, acotamos y sistematizamos su participación en los medios tradicionales de comunicación –declaraciones en espacios periodísticos, documentos oficiales, solicitudes– y en espacios no tradicionales: redes sociales, páginas web o cadenas comunicativas a través de aplicaciones tecnológicas.

Esta investigación, a partir de este novedoso abordaje sociohistórico y de la construcción de datos comparativos, intenta nutrir un campo de estudios en desarrollo y servir de insumo para posteriores análisis sobre el particular vínculo entre los NMS y las derechas del siglo XXI o con el campo político-partidario en general, no sólo en los casos estudiados aquí sino también para el resto de la región latinoamericana.

Los nuevos movimientos sociales latinoamericanos: derivas conceptuales y procesos sociohistóricos

El campo de estudio de los movimientos sociales ha ido mutando con el correr de los años en función de los nuevos interrogantes y

referentes empíricos emergentes. Las contribuciones de Touraine (2006), quien afirma que los movimientos sociales son elementos de un campo de acción histórica, y de Tilly y Wood (2009), para quienes los movimientos sociales y los sistemas políticos institucionales se constituyen mutuamente, son insoslayables. Asimismo, nos centramos en el concepto de ciclo de movilización social de Tarrow para referirnos a

una fase de intensificación de los conflictos y la confrontación en el sistema social, que incluye una rápida difusión de la acción colectiva de los sectores más movilizados a los menos movilizados; un ritmo de innovación acelerado en las formas de confrontación; marcos nuevos o transformados para la acción colectiva (1997, p. 257).

Es a partir de este andamiaje conceptual que el artículo se propone reconstruir el nuevo ciclo de movilización iniciado con el avance de las derechas latinoamericanas del siglo XXI en Paraguay, Brasil y Colombia.

Históricamente, en América Latina, los análisis sobre los movimientos sociales del siglo XX se han dedicado predominantemente a la cuestión rural, campesina e indígena, y obrera, a partir de los trabajos sobre los movimientos sindicales y los populismos (Calderón y Jelin, 1987). Sin embargo, hacia la década de 1980, transformaciones sociales irrumpieron en el esquema interpretativo de este campo de estudios. Siguiendo a Garretón (2001) estos cambios se encontraron definidos por la desarticulación de una relación entre Estado, representación y sociedad civil (de tipo nacional-popular o político-céntrico) y la búsqueda, aún incierta, de nuevas relaciones entre los elementos señalados. En este sentido, el paradigma clásico que veía en la posición estructural el elemento determinante de la acción colectiva y de los actores sociales es abandonado y se da el pasaje a un marco de análisis donde la acción colectiva se configura principalmente a través de cuatro ejes: la democratización política, la democratización social o lucha contra la exclusión y por la ciudadanía; la reconstrucción y reinserción de las economías nacionales o

la reformulación del modelo de desarrollo económico, y la redefinición de un modelo de modernidad. En rigor, lo que se observa es que los NMS “comienzan a identificarse con nuevas formas de opresión que sobrepasan las relaciones de producción, y ni siquiera son específicas de ellas, como son la guerra, la polución, el machismo, el racismo o el productivismo” (De Souza Santos, 2001).

Durante la década de 1990, el neoliberalismo como modelo económico y societal genera tensiones crecientes, cuyo resultado es el estallido de crisis que se extienden entre 1994 y 2005 en toda la región. Tales crisis aglutinan importantes niveles de conflictividad social, de inestabilidad política y de recesión económica. En consecuencia, se experimenta la deslegitimación y resquebrajamiento del paradigma neoliberal como instrumento de ordenamiento de las sociedades. Asimismo, se evidencia una democratización sustancial del campo político, que se manifiesta en la consagración de una lógica que excede el ámbito partidario e institucional. En este escenario, los NMS se configuran definitivamente como los nuevos actores de la política,¹ desbordando la institucionalidad y produciendo nuevas subjetividades autónomas que buscan reformar y renovar el orden de gobierno (Tapia, 2008).

Como señalan Escobar, Álvarez y Dagnino (2001), sus luchas están involucradas con una concepción de ciudadanía alternativa, redefiniendo los sentidos de la democracia. En efecto, emergen movimientos sociales vinculados a la cuestión de género, a la etnia, a la racialidad, a la condición generacional y, al mismo tiempo, tanto en el ámbito rural como urbano, una multiplicidad de movimientos territorializados: los movimientos indígenas, de campesinos sin tierra, de trabajadores sin trabajo, de habitantes sin techo (Seoane, 2018). Para Bruckmann y Dos Santos (2005), en esta fase la identidad de los movimientos sociales empieza a reivindicar una cierta autonomía,

¹ Este fenómeno dio lugar a profusas contribuciones académicas sobre el tema: Dos Santos (2004); Taddei, Seoane y Algranatti (2006); Borón (2007); Zibechi (2009); Svampa (2010); Modonesi y Rebón (2011); Melucci (2015).

al tiempo que su relación con el Estado deja de ser simplemente crítica para ejercer también hegemonía sobre él, generando una base programática de políticas públicas al interior del movimiento. Por ello, los actuales movimientos sociales no son sólo actividades de protesta y reivindicación, sino que constituyen estructuras de acción política (García Linera, Chavez Leon y Costa Monje, 2010).

La progresiva acumulación de las luchas sociales contra las reformas neoliberales y la apertura de un nuevo ciclo de acción colectiva protagonizado, particularmente, por los sectores subalternos (Taddei, Seoane y Agranatti, 2006) rehabilita el concepto de movimientos sociales en un sentido “fuerte” (Svampa, 2017). En efecto, los NMS inician el tránsito de una configuración fundamentalmente subalterna a una reconfiguración tendencialmente antagonista (Modonesi, 2008).

En paralelo a este proceso de revitalización de las luchas de los sectores subalternos, surgen dos campos políticos e ideológicos novedosos con los cuales los NMS se relacionan de manera diversa, articulando distintas estrategias colectivas. Por un lado, emergen las nuevas experiencias populistas donde conviven, de manera contradictoria, la tendencia a la inclusión política y social con un pacto con el capital económico (Soler, 2019). La relación de estos gobiernos con los NMS transita de las tensiones creativas, como fruto de una serie de retroalimentaciones y sinergias, a las tensiones paralizantes, caracterizadas por posiciones más polarizadas y menos dialógicas (Bringel y Falero, 2016).

En este periodo, los actores subalternos en general articulan sus demandas en torno a la identidad étnica, cultural, de género y ecoterritorial y se constituyen en una composición social heterogénea. Sin embargo, tal como advierte Svampa (2010), dado que en América Latina la acción colectiva ha estado atravesada desde el inicio por una multiplicidad de dimensiones y llamados, en nombre de la clase, la nación y el antiimperialismo, sin que ninguno de ellos lograra un primado estructural sobre los otros, es el populismo el que puede dar

expresión política a esta abigarrada realidad popular, a través de la noción unificadora de pueblo.

Por otro lado, se fortalecieron las actuales derechas latinoamericanas. Tanto las que permanecieron en la dirección de los gobiernos como en la oposición consolidan su posición a partir de la crisis de hegemonía abierta en el año 2008 con la crisis económica mundial y la corrosión de la narrativa populista-progresista. Estas derechas apelan a nuevas estrategias de acción e intervención en la esfera política (Luna y Rovira Kaltwasser, 2014) y se distinguen por su vínculo con la democracia liberal en un sentido instrumental, por una narrativa pospolítica que propicia la dilución de la conflictividad social en términos clasistas y por su novedosa composición social (Soler, 2021). En esta nueva etapa, encarnan una estricta renovación moral y una revolución cultural con las herramientas del mundo empresarial. De ahí que estos gobiernos también pueden ser entendidos dentro de la categoría “populismo de derecha” puesto que mantienen “políticas redistributivas *hacia arriba*, a lo que agregan un fuerte énfasis en la necesidad de mantener ciertas jerarquías sociales que consideran *naturales* y una obsesión xenófoba por defender los límites de la comunidad política frente a factores designados como contaminantes de la pureza del *verdadero pueblo*” (Casullo, 2019).

Sin embargo, a pesar de sus novedosos rasgos, la política económica que desarrollan se centra en una reedición del neoliberalismo en un nuevo mundo signado por una lógica financiarizada y bipolar: privatizaciones, liberalización de los mercados, priorización de Tratados de Libre Comercio (TLC) antes que comercio interregional, apertura económica, reducción del gasto social y endeudamiento. Para ello, interponen un recurso propio de las viejas derechas: el uso de la violencia y de las fuerzas de seguridad en un proceso creciente de militarización del territorio y persecución de la oposición política.

Lo que se evidencia durante este periodo es que donde las nuevas derechas toman el ejercicio del poder se inicia un nuevo ciclo de movilización y de protesta social protagonizado por los NMS y caracterizado por un malestar social generalizado respecto de

modelos de acumulación basados en el neoliberalismo y de sistemas políticos excluyente (Rebón y Ruiz Encina, 2020). Aunque presentan diferencias en cuanto a sus repertorios de acción, su composición y su radicalidad, algunos ejemplos son las movilizaciones #YoSoy132 (2012) y #YaMeCansé (2014-15) en México; las movilizaciones de 2015 en Guatemala bajo el lema de Renuncia Ya; el movimiento #UNANosecalla en Paraguay (2015-2016); las protestas anticorrupción en Perú durante 2018; las protestas contra el ajuste económico del gobierno de Michel Temer en Brasil durante 2017; las protestas en Argentina contra la sanción de la reforma jubilatoria por parte del gobierno de Mauricio Macri en Argentina; las protestas en Ecuador iniciadas en octubre de 2019; el estallido social en Chile iniciado por el movimiento estudiantil; y el paro nacional del 21-N en Colombia en noviembre de ese mismo año.

Sin embargo, poco se ha dicho sobre la forma en que las fuerzas de derecha y los NMS se vinculan en este escenario y, particularmente, cómo incide ese vínculo en la lucha popular. De los trabajos existentes, destacamos los estudios de caso (Tohá, 2020; Ramírez Gallego et al., 2020; Palacios-Valladares, 2020) y desde una mirada comparativa ponderamos las producciones de Rebón y Encina (2020), Bringel (2020); Ventura y Billion (2020), Lusting (2020) y Barragan Manjón et al. (2020).

El carácter coyuntural del fenómeno, la mirada unilateral sobre los actores subalternos y el escaso abordaje de casos con perspectiva comparada han generado un área de vacancia, en la cual se inscribe precisamente el trabajo aquí presentado.

A continuación, reconstruiremos las condiciones sociohistóricas y las características de este nuevo ciclo de movilización protagonizado por el *Congreso Democrático del Pueblo* (CDP) en Paraguay, por #EleNão y *Brasil pela Democracia e pela Vida* en Brasil y por la *Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior* (ACREES) y la *Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior* (UNEES) en Colombia.

El nuevo ciclo de movilización durante los gobiernos de la “nueva” derecha en Paraguay, Brasil y Colombia

Tras el ascenso de los gobiernos de Horacio Cartes (2013-2018) en Paraguay, de Iván Duque (2018) en Colombia y de Jair Bolsonaro (2018) en Brasil, se activa un dispositivo basado en la “acumulación” de luchas previas protagonizado por los NMS y se inicia un nuevo ciclo de movilización social. A partir del análisis comparativo de los discursos en los medios masivos de comunicación y de la realización de entrevistas a líderes sociales se analiza la acción colectiva del *Congreso Democrático del Pueblo* contra las leyes de Alianza Público-Privada y de Defensa Nacional y Seguridad Interna en Paraguay (2015-2016); del movimiento estudiantil nucleado en la *Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (ACREES)* y en la *Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior (UNEES)* contra el ajuste económico y la violencia del gobierno de Duque en Colombia (2018-2020); y de *#EleNã* y de *Brasil pela Democracia e pela Vida* contra el ascenso y las políticas de Bolsonaro en Brasil (2018-2020).

Como hemos argumentado, este ciclo se caracteriza por una composición social heterogénea; por la toma del espacio público a partir de la multiplicación de las manifestaciones masivas en las calles (hasta la irrupción de la pandemia por Covid-19 cuando se consolida una dinámica de intervención a través de las redes sociales); por una revitalización de la narrativa antineoliberal conjugada con un discurso identitario; por la visibilización de los peligros de la intensificación de las políticas neoliberales y, finalmente, por una articulación entre movimientos urbanos y rurales. A lo largo de este apartado, se indaga en forma comparada en las condiciones socio-históricas y en las coyunturas críticas de emergencia o revitalización de la acción colectiva protagonizada por los movimientos sociales, para luego analizar su composición social, los repertorios de acción y las demandas que estos actores desarrollan.

La revitalización de la acción colectiva ante las políticas neoliberales

En Paraguay, la transición democrática se caracteriza por la emergencia de luchas sociales –protagonizadas por actores del campo popular– que rápidamente capitalizan la estructura de oportunidad abierta en el campo político y legal (Palau, Ayala, Coronel y Yuste, 2018). Asimismo, una fuerte crisis económica sumada a la incapacidad de los partidos tradicionales para mediar entre el Estado y la sociedad civil y su desvinculación de los liderazgos de base impulsieron a los movimientos sociales como principales protagonistas de la época (Morínigo, 2002).

En efecto, estos actores logran poner freno al proyecto de privatizaciones de bienes y servicios durante la etapa neoliberal en la década de 1990, marcando un hito en la lucha de los sectores subalternos. En principio, el descontento por la implementación de medidas ortodoxas y reformas estructurales deriva en grandes movilizaciones y se encuentra articulado en dos espacios. Por un lado, la Plenaria Popular, integrada por la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas y otras organizaciones, sindicatos, estudiantes, y movimientos y partidos políticos. Por otro lado, el Frente Nacional de Defensa de los Bienes Públicos y el Patrimonio Nacional, integrado por la Federación Nacional Campesina (FNC), la Central Nacional de trabajadores (CNT), Cambio para la Liberación (del PLRA) y la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP) entre otras.

Es con la conformación del Congreso Democrático del Pueblo (CDP) en 2002 que se logran las condiciones necesarias para contrarrestar las presiones de los organismos internacionales de crédito y de algunos actores locales que veían en el proceso la oportunidad de consolidar la fortuna conseguida en el periodo anterior vía adquisición o participación en consorcios (Nikolajczuk, 2018). El 15 de mayo se lleva a cabo su primera manifestación con más de mil delegados. Las principales demandas fueron la derogación de la Ley 1.615 (de

reforma del Estado),² de la Ley de Reforma de la Banca Pública, del anteproyecto de Ley Antiterrorista, del proyecto de ley de Concesión de las Rutas, del IVA agropecuario. Su principal bandera era “contra la corrupción e impunidad” (Palau, 2002).

La plataforma unitaria consigue su objetivo, y logra que el 6 de junio de ese mismo año el presidente de la República, Luis Ángel González Macchi, suspenda la Ley de Reforma del Estado y retire del Congreso la Ley Antiterrorista, la Ley de Concesión de Rutas y el IVA agropecuario. Sin embargo, en esta etapa, el CDP no logra articular acciones colectivas más allá de esta coyuntura crítica y se desarticula completamente, no teniendo gravitación durante la presidencia de Nicanor Duarte Frutos (2003-2008). Aun así, su constitución tiene importantes consecuencias para la reconfiguración de la izquierda paraguaya. Tal como advierten Sánchez, Bozzolasco y Escobar:

Pasado el proceso unitario de 2003, la izquierda clasista entró en un proceso de reinención. Dos fuerzas provenientes de militantes que participaron en lo que fue Izquierda Unida y el CDP iban a constituirse en los partidos más sólidos a nivel electoral dentro de esta línea estratégica. Estos fueron el Partido Movimiento al Socialismo (P-MAS) y el Partido Popular Tekojoja (PPT), que surgieron en 2006; el primero centrado en Asunción, y el segundo, en las zonas rurales (2020, párr. 25).

Con la llegada de Fernando Lugo (2008-2012) al gobierno se suspenden seis décadas de gobierno del Partido Colorado. Particularmente, incluye a aquellos sectores históricamente excluidos de la política institucional paraguaya. De este modo, el ex obispo se convierte en el primer presidente que accede al poder con el apoyo de movimientos sociales, sindicatos y el campesinado.³ Así, la Alianza Patriótica para

² Ley General de Reorganización y Transformación de Entidades Públicas Descentralizadas y de Reforma y Modernización de Organismos de la Administración Central.

³ En cuanto al apoyo del sector campesino a la coalición de gobierno, podemos argumentar que su posición no fue homogénea ni se encontraron ausentes las tensiones internas. Como argumentan Palau y Ortega (2008) y Escobar Martínez (2013) pudieron

el Cambio o APC⁴ es conformada por una coalición de movimientos sociales y campesinos, sectores del sindicalismo, partidos de izquierda y el tradicional Partido Liberal (PLRA). El 20 de marzo de 2010 se conforma la concertación denominada Frente *Guasú* que responde directamente a la figura de Fernando Lugo y muestra el máximo grado de unificación de la izquierda paraguaya (Bozzolasco, 2019).

La constitución social de este nuevo colectivo político da cuerpo a un programa que reivindica propuestas históricamente formuladas por los sectores progresistas de la sociedad paraguaya y, en gran medida, la agenda regional del ciclo populista-progresista: reactivación e intervención en la economía; combate de la corrupción; independencia del Poder Judicial; recuperación la soberanía nacional y un proyecto redistributivo en términos progresivo. Pero la propuesta más radical y que se traduce en el encolumnamiento tácito o expreso del campo progresista y popular en la APC es la posibilidad histórica de concretar, finalmente, la reforma agraria.

En un contexto signado por la efervescencia social y el aumento de las medidas de acción directa por parte de los sectores subalternos, especialmente del campesinado, surge una figura cuya utilización será central para habilitar la persecución de líderes de base y para delimitar la capacidad de acción de los movimientos sociales en la etapa posterior: el Ejército Paraguayo del Pueblo (EPP). Tal como advierte Prego el “EPP deviene en el sujeto dilecto en las narrativas

identificarse cuatro posiciones en este sector. En la primera de ellas, ponderó el amparo institucional: explicitando su apoyo durante la campaña electoral al tiempo que parte de sus integrantes formaron las listas de candidatos. En segundo lugar, se vio un apoyo de la dirigencia, pero inhibiendo el respaldo de las organizaciones como tal. En esta posición se puede ubicar a la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica y la Coordinadora de organizaciones de los Bañados. En tercer lugar se encuentran aquellas que no tomaron posición, como el Consejo Nacional de Organizaciones Populares-Movimientos Sin Techo CONOP-MST. Por último, aquellas que tuvieron un rol opositor, como la Federación Nacional Campesina (FNC) que llamó a la abstención, a modo de crítica al “electoralismo”.

⁴ La APC, con la fórmula Lugo-Franco, se erigió como la principal alternativa frente a las candidaturas de Blanca Ovelar por el Partido Colorado, Lino Oviedo por UNACE y el empresario Pedro Fadul por Patria Querida. La APC logró imponerse con el 40,90% en las elecciones presidenciales del 20 de abril de 2008.

políticas y mediáticas, y su supuesta vinculación con Fernando Lugo fue objeto de denuncia permanente por parte de la oposición política y los grupos empresariales” (2021, p.81). Los discursos en torno al mismo resultan funcionales al recrudecimiento del proceso de militarización de la zona norte del país.

En 2012, la masacre de *Curuguaty*⁵ y el conflicto desatado habilita la destitución de Fernando Lugo mediante un juicio político *express*. El ascenso presidencial de Federico Franco –quien fuera vicepresidente y líder del Partido Liberal (PLRA)– representa el ingreso directo al gobierno de los intereses de los actores más concentrados de la economía, en particular aquellos integrados a la dinámica del agronegocio.⁶ Tras las elecciones del 2013, es electo presidente el empresario Horacio Cartes.⁷ Su gobierno se presenta como “modelo de reestructuración integral del capitalismo paraguayo, para integrar el país y su alta burguesía empresarial al sistema económico mundial

⁵ El 15 de junio de 2012 se produjo un operativo policial para desalojar a 70 campesinos de las tierras públicas *Marina Kue*, en el departamento de Canindeyú. Las mismas eran reclamadas por una empresa privada, Campos Morombí, propiedad del líder del Partido Colorado Blas Riquelme. En el hecho murieron 11 campesinos y seis policías y fue uno de los núcleos centrales de sobre los que se basó el libelo acusatorio del juicio político con el que depusieron a Fernando Lugo.

⁶ Esto pudo verse, entre otras cosas, en las primeras medidas de gobierno: reemplazó al titular del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) por Héctor Ayala, accionista de la empresa Pacific Agrosciences de Alto Paraná, dedicada a la venta de agroquímicos, vinculada a la multinacional Syngenta; en julio se dejó sin efecto la reglamentación de la ley de plaguicidas y otras tantas tendientes al resguardo de la población, como la eliminación de la exigencia de aviso previo para la aplicación de agroquímicos; en agosto autorizó de forma excepcional, por medio de un decreto, tanto el ingreso de algodón RR y algodón de eventos apilados BT-RR, como decenas de variedades de semillas alteradas transgénicas. En septiembre, por decreto N° 9699, dio lugar a la creación de la Comisión Nacional de Bioseguridad Agropecuaria y Forestal con prerrogativas de mayor discrecionalidad. Los permisos de importación de agroinsumos pasaron, según datos del anuario estadístico 2012, emitido por el Senave, de 755 en junio a 1456 en agosto del mismo año.

⁷ Horacio Cartes es el líder de un grupo económico (junto con su hermana Sarah Cartes) diversificado e integrado con participación en diversas ramas de la economía, lo que se conoce como un verdadero *holding*. Sostenemos que es un *outsider* dado que se afilió al Partido Colorado para presentarse en los comicios, sin antes poseer filiación ni trayectoria política alguna de militancia.

transnacional en desarrollo” (Lachi, 2015, p. 248). Tal como advierte Canese (2015), el *Nuevo Rumbo* –programa de gobierno que se centra en la liberalización, desregulación y financiarización de la economía– encarna una restauración del modelo neoliberal suspendido en 2002.

La Ley de Alianza Público Privada (art. 52 Ley N° 5102/2013) o APP se convierte en el “dispositivo ejemplar del modelo empresarial de desarrollo” propuesto por Horacio Cartes (Escobar, 2015, p. 28). En el artículo 52, la misma establece que la iniciativa privada puede hacerse cargo de los servicios de energía eléctrica, del agua potable, del alcantarillado sanitario, de las plantas de tratamiento de efluentes, del transporte ferroviario, del transporte carretero, de los aeropuertos, de las hidrovías (su dragado), de los puertos fluviales, del cemento, de los hidrocarburos, de las cárceles, de la educación, de la salud y de la infraestructura urbana, entre otros.⁸

Este instrumento favorece a las grandes empresas extranjeras y a las empresas nacionales en alianza con estas, puesto que prevé la movilización de recursos públicos y privados para obras de

⁸ Además de habilitar las privatizaciones vía contratos de alianza público-privadas, hay dos puntos que generan también resistencias y que son parte de la implementación de la ley. El primero de ellos es que la Ley APP creó el Fondo de Garantías y Liquidez como un fondo fiduciario que será administrado por la Agencia Financiera para el Desarrollo (AFD), con el objetivo de generar las condiciones financieras para asumir los compromisos a los que se obliga al Estado a través de los contratos, y de los costos por resolución de controversias. La fuente más importante del AFD es el aporte constituido por los recursos del Fonacide compuestos por los ingresos que generan Itaipú y Yaciretá y asignados al Tesoro Nacional para la inversión en infraestructura pública. El segundo consiste en que los riesgos de los proyectos de inversión y gestión de las APP serán cubiertos por el Estado paraguayo, y los contratos se elaboran y se aprueban caso por caso, por parte de las instituciones del Poder Ejecutivo, sin pasar por el Congreso Nacional como está previsto en las competencias de dicho cuerpo por la Constitución Nacional y por la Ley de Concesiones de Obras y Servicios del año 2000 (Molinier, 2015, p. 189). Asimismo, con esta ley, el Estado renuncia a su soberanía jurídica, trasladando la jurisdicción ante eventuales conflictos a arbitrajes internacionales, como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. Al mismo tiempo el gobierno emitió dos decretos que modifican las reglamentaciones sobre la Evaluación de Impacto Ambiental, propiciando un marco más flexible y relajado y habilitando la depredación de los recursos naturales.

infraestructura, para lo cual únicamente podrán concurrir empresas de infraestructura con gran capacidad financiera. Como advierte Lila Molinier, “la Alianza Público-Privada es la nueva estrategia de privatización de la inversión y gestión de servicios públicos [...] y es implementada por la mayor parte de los países de la región, con pleno apoyo de los organismos de cooperación mundial y regional” (2015, p.188).

La concreta aplicación del programa *Nuevo Rumbo* y, particularmente, de la APP se sustenta en la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, que le permite al Poder Ejecutivo el empleo de las Fuerzas Armadas en el control de la seguridad interior. Entre sus primeros actos de gobierno, Horacio Cartes promulga las modificaciones a esta ley para disponer de las Fuerzas Armadas de forma inmediata frente a casos de amenaza interna por “terrorismo”. Tales modificaciones tienen un tratamiento parlamentario urgente bajo el argumento de que el EPP se volvía una amenaza contra la seguridad de lxs paraguayxs. Tal como argumentan Soler y Torre:

Al cumplirse un año de su mandato, el presidente Horacio Cartes presentó ante el Congreso un informe de gestión donde destaca “la instalación de tareas conjuntas (...) que permite la incursión (en la zona norte del país) de militares en este combate; la determinación enérgica de denominar al grupo (EPP) como verdaderos criminales contrarios al pueblo paraguayo; la inversión en capital humano mediante capacitación de agentes de inteligencia y manejo de información; la inversión material mediante la adquisición de vehículos tácticos que permiten mayor seguridad en las operaciones, así como dotaciones de armas y municiones (2016, párr.7).

La política neoliberal de Horacio Cartes vuelve a colocar en la agenda de las organizaciones sociales la necesidad de la lucha conjunta contra lo que el campo popular interpreta como “políticas de saqueo” y la conformación del CDP vuelve a ser impulsado por muchas de ellas (Palau, 2014). En efecto, el movimiento campesino, parte del arco sindical, el movimiento estudiantil, otras organizaciones sociales y

partidos políticos forjaron un programa de acción conjunta. En septiembre de 2013, convocado por la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A), la Central Nacional de Trabajadores (CNT), Frente Sindical y Social, la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Paraguay (COCIP) y agremiados al Sindicato Nacional de Telecomunicaciones (Sinatel) y Sitrande se realizó un Congreso Unitario donde hubo una escalada de movilizaciones, tras las cuales se presentó ante la Cumbre de Poderes del Estado un documento que manifiesta el rechazo a la privatización, la persecución sindical y solicitaba la gratuidad del servicio de salud y educación de calidad.

En 2014 se lleva a cabo la primera huelga general de las últimas dos décadas. La protesta es conformada por tres frentes: la Federación Nacional Campesina (FNC), la Corriente Sindical Clasista (CSC), el Partido Paraguay Pyahurã (PPP) y la Organización de Trabajadores de la Educación (OTEP-SN). La consigna es “No al modelo agroexportador y el rechazo a la ley de Alianza Público-Privada (APP)”. Asimismo, durante las manifestaciones por el aniversario del primer año de gobierno de Horacio Cartes, en agosto del 2014, la concertación Frente *Guasú*, el Partido Paraguay *Pyahurã*, la Federación Nacional Campesina, la Coordinadora Nacional de Mujeres Trabajadoras y Rurales (Conamuri), el Partido *Kuña Pyrenda*, la Corriente Sindical Clasista (CSC), las organizaciones 15 de Junio y Frente Recoleta, el Frente Patriótico Popular y la Organización de Trabajadores de la Educación (OTEP-SN) llevan a cabo en forma conjunta cortes intermitentes de rutas en diez departamentos del país.

No es casual, sin embargo, que el epicentro de este proceso se diera durante la marcha del 10 de diciembre de 2014, fecha mítica de las movilizaciones sociales en Paraguay configurada en torno a la lucha por la democracia. La conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos en un país signado por la exclusión de gran parte de la población del derecho a la tierra, por la reciente experiencia de Curuguaty y por la violencia estatal en ascenso fungieron de plataforma para que se plantearan los principales ejes de articulación y

se postulara la renovación de la plataforma CDP para comienzos del año 2015.

La crisis del modelo neoliberal, con sus consecuente debate económica y aumento del conflicto social representado por NMS, también tuvo un escenario privilegiado en Brasil. En 2003, con la llegada de Lula Da Silva al poder se inicia el denominado ciclo progresista-populista.

Lula, encabezando la candidatura del Partido de los Trabajadores (PT), llega al gobierno rompiendo la tradición de los partidos creados desde el Estado y asume generando consensos entre diferentes sectores sociales.⁹

Al tiempo que procuraba calmar a los mercados presentando reformas favorables a estos intereses, Lula construía desde el Estado un vínculo de proximidad con los movimientos sociales. Recibió a los dirigentes del Movimiento de los Sin Tierra (MST) en el Palacio del Planalto y se colocó en la cabeza el gorro rojo del MST. Los terratenientes de la conservadora Unión Democrática Ruralista (UDR) y los periódicos de la prensa tradicional pusieron el grito en el cielo (Goldstein, 2020, p. 38).

A partir de 2006, con la creación de los BRICS,¹⁰ Brasil ocupa un lugar relevante en las relaciones internacionales y Lula comienza a tener un rol central en América Latina. Por otro lado, el modelo económico desarrollista y el alza de los precios de los *commodities* permiten un vigoroso crecimiento económico que es acompañado por políticas de transferencia monetaria como el programa *Bolsa família*. El

⁹ La conciliación del gobierno de Lula entre diferentes actores sociales –grupos empresarios y movimientos sociales– se desarrollaría a lo largo de toda la presidencia. Goldstein (2019) destaca la participación del presidente en eventos diametralmente opuestos como el Foro Social Mundial (Foro de San Pablo) y el Foro Económico Mundial de Davos, uno de los principales encuentros empresariales y financieros globales.

¹⁰ Los BRICS es el nombre con el que se conoce a las economías emergentes de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El grupo fue creado en 2006 con el objetivo de convertirse en las economías dominantes hacia mediados del siglo XXI.

modelo brasileño se caracteriza por la articulación de los diferentes actores económicos en las diversas regiones del país, donde el Estado federal tiene un rol central en la ejecución de políticas clave para el desarrollo: movilización de la base científica y tecnológica, promoción de la innovación y establecimiento de programas estratégicos para la inclusión social (Scargiali, 2020a). Para el final de su segundo mandato, Lula alcanzaba una popularidad superior al 80%.

Dilma Rousseff, ex-ministra de Minería y Energías del gobierno del PT y encargada de llevar adelante un ambicioso programa de infraestructura, fue electa presidenta en 2011. Militante política durante los años de la dictadura, Rousseff no provenía del sindicalismo –ni de los movimientos sociales–. Durante su primer gobierno tuvo que enfrentar los efectos de la crisis económica global de 2008-2009. Como destaca Anderson (2019), la presidenta electa comienza su gobierno presionado por sectores de la élite financiera que acompañan una serie de medidas de recorte del gasto público que afectan los niveles de crecimiento, índice que para 2011, se había reducido al 1% anual. Ante la desaceleración, el gobierno aplica políticas de subsidios a los servicios públicos, expansión del crédito a través de los bancos estatales y reducción de los impuestos al trabajo. Sin embargo, en 2013 el ministro de Hacienda decide aumentar la tasa de interés y reducir el gasto público generando graves problemas económicos. Con la decisión de aumentar las tarifas de transporte público, la oposición política y sectores de la clase media comienzan un nuevo ciclo de movilización y de protestas en las calles. Al fenómeno, se acopla el ascenso de una nueva derecha montada en la ola de movilizaciones.

El ciclo de movilización contra el gobierno *petista* que comienza en 2013 es caracterizado desde una perspectiva multicausal e histórica. En palabras de Bringel, las movilizaciones de 2013 abren un nuevo ciclo político en el país. Su hipótesis radica en que la apertura sociopolítica de los gobiernos de Lula y Dilma posibilitan la expansión de las movilizaciones de individuos y colectivos tanto por izquierda, como por derecha:

Las formas de acción y de organización que adoptaron –propias de una transformación de las formas de activismo y del compromiso militante en el país (y en el mundo hoy)– favorecieron el surgimiento rápido, la mediatización y la capacidad de interpelación y expresividad, pero también provocan diversas tensiones y ambivalencias en su propia constitución y en los resultados generados (2017, p. 147).

Al mismo tiempo, no puede obviarse la experiencia previa de los ciclos de movilización del proceso de redemocratización tras la dictadura (1984-1985) y el *impeachment* contra Fernando Collor de Mello (1992). En las primeras, tuvieron un rol central los sindicatos y partidos políticos, mientras que, en la segunda, tuvieron un papel relevante diferentes organizaciones de la sociedad civil, como la *Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia* (Scargiali, 2020b). A diferencia de esas movilizaciones, las de los años 2013-2015 se caracterizan por la participación de actores sociales tradicionales: sindicatos y organizaciones territoriales, pero también, nuevos: las clases medias urbanas (Natalucci y Ferrero, 2021). Al respecto, los autores mencionan que la configuración de estos viejos y nuevos actores en la protesta social es producto del creciente distanciamiento entre el PT y la izquierda tradicional y en este sentido, adoptan una postura autónoma o antagonista con el partido de gobierno: “las protestas sociales adoptaron una dinámica antisistémica que resistieron la integración dentro de las reglas de juego político” (Natalucci y Ferrero, 2021, p. 59). Durante las movilizaciones del ciclo, salen a las calles más de 20 millones de brasileños, en su gran mayoría jóvenes.

Anderson (2019) destaca que los movimientos de derecha *Vem Pra Rua* y *Brasil livre* lograron captar el descontento social y el agotamiento del gobierno de Rousseff a partir de un manejo excepcional de las redes sociales, logrando captar –por derecha e izquierda– simpatizantes a través del uso intensivo de internet. Por otro lado, también menciona el poder de algunas Iglesias Evangélicas y sus medios de comunicación que luego serían clave para la elección de Jair Bolsonaro.

Según Zibechi (2016), la ola de protestas constituye un “tsunami cultural y político” sin el cual no es posible comprender el *impeachment* a Dilma Rousseff y el posterior ascenso de las derechas. En efecto, a diferencia de los golpes de Estado de las décadas de 1960 y 1970 en que las Fuerzas Armadas tuvieron un rol central bajo la Doctrina de Seguridad Nacional, en los golpes de Estado del siglo XXI los actores provienen principalmente desde la sociedad civil y se valen de instrumentos legales como principal mecanismo destituyente. La masificación de la protesta social durante el segundo gobierno de Dilma Rousseff y el posterior *impeachment* culmina en la capitalización de las fuerzas de derecha. Bringel (2016) destaca que durante este ciclo se profundiza la polarización política y social del país, que tuvo impactos en lo político institucional y electoral.

El PT durante los gobiernos de Lula (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016) logra construir una hegemonía que el *impeachment* pone en jaque: “Logró desarmar el pacto social lulista concluyendo un ciclo político que se había iniciado en el 2003 y pone fin al ciclo de coalición de hegemonía petista” (Goldstein, 2016, p. 91). El mismo autor menciona cuatro factores que llevan a la crisis del gobierno de Rousseff y que culminaron con el golpe de Estado: la caída del ciclo de las *commodities* y deterioro del modelo desarrollista; las manifestaciones contra el gobierno en 2013; la crisis de la alianza política e institucional, que llevó a la ruptura con el PMDB y la pérdida de hegemonía del PT en la coalición gobernante y, por último, la crisis social desatada tras las últimas elecciones de 2014. En palabras de Salas Oroño (2015), esto permite la conformación de una “clase política golpista” en el Parlamento integrada por diputados del PMDB y de otros partidos y al mismo tiempo, impulsa una discursividad racista, homofóbica y autoritaria:

En las diversas intervenciones [...] las narrativas a las que apelaron [lxs diputadxs] giraron en torno a acusaciones contra el PT en general y Dilma Rousseff en particular, por mafiosos, corruptos e incapaces para gobernar, por no respetar la ley de Dios, por apoyarse en el

comunismo, por no promover el crecimiento y perjudicar empresas. También se instó a acabar con el chavismo, los bolivarianismos, el socialismo, los homosexuales y los derechos humanos (Soler y Prego, 2020, p. 44).

Consumado el golpe de Estado contra Dilma Rousseff, el 31 de agosto de 2016, asume las tareas ejecutivas el vicepresidente Michel Temer, líder del MDB con bajos niveles de aceptación y legitimidad. Entre las primeras medidas tomadas por Temer, se destacan la eliminación y fusión de ministerios (Mujeres, Cultura, Desarrollo Agrario, Igualdad Racial y Derechos Humanos); el achicamiento del Estado en materia económica (particularmente el desfinanciamiento de programas sociales); la reforma laboral y aumento de la edad jubilatoria; y la promoción de las inversiones extranjeras privadas.

Desarticulada la capacidad de movilización en las calles del PT y acabada su hegemonía política, la justicia brasileña encarnada en el Juez Sergio Moro –quien luego sería ministro de Justicia durante la primera etapa del gobierno de Jair Bolsonaro– y el Tribunal Superior Electoral, llevan adelante la detención de Lula Da Silva con el objeto de impedir su candidatura presidencial en las elecciones de 2018.

Apartado de la escena electoral el principal candidato, y con el apoyo de sectores ligados a los grandes empresarios agrícola-ganaderos, sectores conservadores de la Iglesia Evangélica y una serie de partidos regionales, obtiene la victoria en las elecciones presidenciales de 2018 el ex capitán del Ejército, Jair Messias Bolsonaro.

El presidente electo, logra capitalizar las movilizaciones sociales de la clase media y el rechazo al PT –y al propio sistema político– que venían tomando fuerza desde 2013 (Rocca Rivarola, 2020).¹¹ Bolsona-

¹¹ Como sostiene Rocca Rivarola, “fue la campaña de Bolsonaro la que terminó de combinar explícita y radicalmente [las] vertientes del *antipetismo*, portando una suerte de cruzada por valores tradicionales que supuestamente el PT habría cuestionado durante sus años de gobierno o que podría amenazar durante un eventual mandato futuro. Valiéndose de cierto terrorismo verbal, una intensa religiosidad en su discurso [...], Bolsonaro se propuso como encarnación de una reacción conservadora, y reformateó la crisis brasileña hacia una polarización de valores, en la que la familia, la nación, Dios, la heterosexualidad, y otras pautas socio-culturales eran presentadas

ro, en palabras de Goldstein (2019), además logra construir poder a partir de la producción de enemigos que refuerzan su identidad. En este sentido, es usual encontrar en el discurso presidencial afirmaciones xenófobas, homofóbicas y despreciativas del movimiento de mujeres, los movimientos sociales urbanos de estudiantes y rurales ligados a expresiones de izquierda.

A diferencia de Paraguay y de Brasil, que han experimentado gobiernos alineados con el ciclo populista-progresista en la región, abortados por un nuevo golpismo, Colombia representa un caso de continuidad de la hegemonía neoliberal, que había sido institucionalizada por la Constitución sancionada en 1991 (Mercado, 2017). El ascenso de Álvaro Uribe Vélez en 2002 y sus dos mandatos consecutivos (2002-2006 y 2006-2010) están marcados por su Política de Defensa y Seguridad Democrática, bajo la cual se transforma a las FARC en el “gran enemigo” de Colombia (Rodríguez, 2018). Esta política se enmarca en el clima antiterrorista posterior al atentado contra la Torres Gemelas en Estados Unidos, que con “la inclusión de las FARC en el listado de organizaciones terroristas como Al Qaeda se terminará de liquidar sus posibilidades de reconocimiento como interlocutor político válido” (Rodríguez, 2018, p. 46). Así, siguiendo a Rodríguez, Uribe abre una ofensiva militar contra los grupos guerrilleros, amparado en la colaboración y el financiamiento de Estados Unidos. La estrategia de la guerra desplegada por el gobierno redundó, no solo en reiteradas violaciones a los Derechos Humanos, sino que:

La recuperación militar no estuvo seguida por una mayor presencia institucional o un esfuerzo estatal para ofrecer a la población de las zonas en conflicto mejores posibilidades en el acceso a servicios básicos y empleo de calidad [...] una política estatal enfocada en aumentar las garantías al empresariado y llevar al límite la apertura comercial (Rodríguez, 2018, p. 52).

como enfrentando una supuesta transgresión o cuestionamiento por parte de los gobiernos petistas y su dirigencia” (2020, p. 246)

De este modo, la profundización del neoliberalismo durante los años de Uribe se evidencia en la suscripción de Colombia a distintos Tratados de Libre Comercio (TLC) en 2006, 2007 y 2008, que comienzan a confluir en una reactivación de la protesta social. En este contexto, el movimiento estudiantil colombiano atraviesa un proceso de recomposición que, desde una mirada de mediana duración, había comenzado hacia fines de la década de 1990. Tal como lo caracteriza Archila, desde los años 1970 y durante buena parte de los 1990 se observa un período de reflujo, luego de que:

El discurso radical de algunos sectores estudiantiles alineados con la izquierda del momento los alejó parcialmente del pueblo con quien querían hacer el anhelado cambio, llevando temporalmente al movimiento estudiantil a una crisis organizativa y a una dispersión en su acción sociopolítica (2012, p. 95).

Cabe mencionar que las décadas de 1970 y de 1980 en Colombia han estado signadas por la cruda represión por parte del gobierno sobre las manifestaciones de disconformidad, lo que ha afectado el desarrollo del movimiento estudiantil en particular y de la protesta social en general. No obstante, el autor destaca que, aún en los años de retraimiento del movimiento estudiantil se producen protestas en torno a la designación antidemocrática de las autoridades universitarias, en reclamo por la autonomía universitaria, los problemas de financiamiento de la educación y “la demanda por la vigencia de los Derechos Humanos” (Archila, 2012, pp. 89-90) incrementándose desde los años ochenta. A estas demandas, en la época de Uribe se suman los reclamos contra la reforma constitucional que habilitaba su reelección y la incorporación de Colombia a los TLC mencionados. Ante el incremento de las protestas, la respuesta gubernamental de Uribe es, a partir de 2008, autorizar a las fuerzas policiales a ingresar a los predios universitarios sin la necesidad de contar con el consentimiento de las autoridades.

La línea de gobierno con rasgos autoritarios, las violaciones a los Derechos Humanos y los excesos en la Política de Seguridad

Democrática deslegitiman al gobierno de Uribe, provocando una ruptura en los consensos sociales que predominaban en ese entonces sobre la respuesta armada por parte del Estado al conflicto con las agrupaciones guerrilleras. Rodríguez nos habla de “la polarización entre una agenda de paz y una de guerra” (2018, pp. 53-54) que en este escenario posibilita la llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia en 2010 y un cambio político en el abordaje del conflicto armado, lo que tiene repercusiones en la protesta social.

En su papel de ministro de Defensa del gabinete de Uribe entre 2006 y 2009, Santos es implicado en las denuncias sobre los casos de “falsos positivos” que le atribuían la responsabilidad política sobre los hechos. Además, como candidato a la presidencia su campaña electoral estuvo orientada en torno a la continuidad de la línea política de Uribe, de quien se decía su sucesor. Ya como presidente electo con el 68,6% de los votos (con una abstención electoral superior al 55%), Santos manifiesta lo que es el principal punto de desacuerdo respecto de su antecesor –y líder político– sobre el abordaje del conflicto armado. De este modo se inician nuevamente los acercamientos del gobierno con las guerrillas, en lo que abre un nuevo proceso de diálogo y negociación para lograr un pacto de paz con las FARC-EP. No es este el único punto de diferenciación entre los gobiernos de Uribe y Santos, sino que también existe un giro en la política internacional en este período. Como mencionamos al comienzo del apartado, Colombia no forma parte del ciclo populista-progresista de las primeras décadas del siglo XXI en América Latina. Sin embargo, bajo la presidencia de Santos se posiciona más cerca de países que estaban atravesando dicho proceso. Esto se evidencia en la recuperación de las relaciones bilaterales con Venezuela y Ecuador, y en el acercamiento a las iniciativas impulsadas desde la UNASUR. Un punto en el que sí se observa una línea de continuidad entre Uribe y Santos es en la “obediencia a las fórmulas neoliberales pautadas por los Organismos Financieros Internacionales y cuya mayor apuesta estratégica se concreta en 2011 con la Alianza del Pacífico, un bloque comercial conformado junto a Chile, México y Perú” (Rodríguez,

2018: 54). Así, tenemos que el período de Santos sostiene la política económica de corte neoliberal de su antecesor, mientras que, a diferencia de este, apuesta por la pacificación del territorio nacional, con el fin de ampliar los márgenes de las actividades económicas orientadas al sector externo en regiones que se encontraban sumidas en el conflicto armado.

Durante el gobierno de Santos la movilización social sufre transformaciones a partir de las cuales se legitima como forma de participación política. En este sentido, entre 2010 y 2018 hay un incremento de las manifestaciones y una diversidad en torno a las demandas que las movilizan, lo que Cepeda identifica como “cambios en la estructura de oportunidad política, fruto del proceso de paz” con la guerrilla de las FARC (2018, p. 38). En estos años, las agendas de protesta se enfocan en la educación, los derechos laborales, el medio ambiente, la defensa del campo, los derechos humanos, indígenas y la paz (Cepeda, 2018, p. 38). La autora enumera tres razones por las que el proceso de acuerdo de paz oficia como el principal motor de estos cambios en la protesta social: primero, a partir del comienzo de las negociaciones, que implican el reconocimiento del conflicto armado por parte del gobierno, se ponen en agenda cuestiones como la desigualdad, la educación, el medio ambiente y los derechos ciudadanos. En segundo lugar, menciona que, a partir de entonces, los sectores que impulsan los distintos reclamos percibieron una mayor predisposición por parte del gobierno para atender a las demandas. Por último, la búsqueda de una salida pacífica al conflicto con los grupos guerrilleros deslegitima las respuestas represivas por parte del Estado frente a actores políticos no armados (Cepeda, 2018), lo que dio envión a la movilización social como herramienta de lucha disponible para los actores.

El nuevo ciclo de protestas en Colombia se inicia, entonces, en 2011 con un paro de transportadores de carga, al que se suman distintas movilizaciones estudiantiles del sector universitario en contra de la reforma de la Ley 30 de Educación Superior. Esta ley implicaba una mayor mercantilización en el acceso a la educación universitaria.

En ese momento se forma la Mesa Amplia Nacional de Educación (MANE) con el objetivo de bloquear dicha reforma (Cepeda, 2018, p. 39), lo que constituye un antecedente directo de los dos exponentes del movimiento estudiantil que trabajamos en este proyecto de investigación: la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (ACREES), formada en 2015 durante el segundo mandato presidencial de Santos, y la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (UNEES), creada posteriormente, en 2018. Como expresa una de las referentes de la ACREES:

La MANE fue muy clave porque dentro del movimiento estudiantil hay un debate programático: ¿qué es lo que queremos? ¿Cómo es la educación que queremos? (...) El programa mínimo [de la MANE] tenía puntos como autonomía, democracia, financiación, bienestar, calidad (...). Ahí empiezan los Encuentros Nacionales de Representantes Estudiantiles (ENRE) y nos dedicamos a dos engranajes, lo que tiene que ver con la política pública de la educación superior y todo lo fuerte de la movilización social, pero también lo que es ser una representante estudiantil. Empezamos a ver cómo se organiza el movimiento estudiantil en el resto de América Latina (Entrevistada, ACREES).

En consonancia, observamos que la MANE representa el puntapié de una nueva articulación entre los distintos sectores estudiantiles, así como también la expansión de las protestas estudiantiles hacia otras problemáticas que exceden el campo educativo. Así, en términos internos al movimiento estudiantil, la reforma regresiva de la Ley de Educación Superior propuesta por el gobierno de Santos fue el aglutinante para que las organizaciones nacionales y regionales, representantes de universidades y de institutos públicos y privados, dejaran de lado sus diferencias en torno a lograr la unidad frente al gobierno (Archila, 2012, pp. 92-93). Por otro lado, en esta coyuntura el movimiento amplió sus márgenes de acción, logrando movilizaciones nacionales semanales que convocaban no solo a estudiantes y profesores, sino también a la ciudadanía en general. Además, el

movimiento participó en debates parlamentarios y “construyó alianzas con fuerzas partidistas críticas al proyecto de reforma oficial” (Archila, 2012, p. 94), logrando el retiro del proyecto en noviembre de 2011. Sumado a esto, la MANE se caracteriza por innovar en las formas de protesta, utilizando recursos estéticos y lúdicos como “besatones”, “abrazatones” y manifestaciones con estudiantes disfrazados, privilegiando este tipo de iniciativas pacíficas, en las que la irrupción en el espacio público se caracterizaba por estas formas novedosas vinculadas con dinámicas artísticas, con un sentido que apelaba a la sensibilidad social antes que el recurso de la violencia.

Al ciclo de movilización abierto a partir de 2011 por transportistas y estudiantes se suman las movilizaciones encabezadas por campesinos –movilizados en 2013 contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos–, “indígenas, maestros, organizaciones de víctimas y cultivadores de hoja de coca de algunas regiones del país, entre otros” (Cepeda, 2018, pp. 39-40). A ello se agregan, en 2016, manifestaciones a favor de la firma del Acuerdo de Paz, que cuentan con sectores de la población que no participaban habitualmente de este tipo de protestas.

Al tiempo que el gobierno de Santos se encamina en la negociación por la paz y sella el acuerdo de La Habana, la derecha liderada por Uribe profundiza la polarización política apelando a formar un “frente contra el terrorismo” y calificando al acuerdo como un desvío del gobierno hacia la impunidad, tal como muestra Rodríguez (2014). Este sector se cristaliza en un nuevo partido político que nace en 2013 bajo el nombre de Centro Democrático, compuesto por alas del uribismo y del Partido Conservador. Al respecto, Ávila Martínez y Morales Pérez plantean que en este espacio político se aglutinan “las caras representativas de esa nueva derecha colombiana” (2021, p. 10). A partir de 2018, con el triunfo electoral de Iván Duque, se transforma en el partido de gobierno, obteniendo además la mayoría en el Senado.

En lo que refiere a la protesta social, a partir de 2018 presenta un nuevo giro que Cepeda establece como “una gran incomprensión de

la movilización social por parte del recién electo gobierno de Iván Duque [...] criminalizando la protesta social y estigmatizando grupos como los estudiantes” (2018, p. 41). Quienes protagonizan la protesta desde el movimiento estudiantil confirman estos virajes a partir de la llegada de Duque. En este sentido, identifican cambios en la reacción gubernamental ante la protesta, pasando de instancias de diálogo y negociación en los primeros meses de mandato en 2018, a la profundización de la represión y la criminalización en 2019 y acentuada en 2021. Los agentes del movimiento interpretan esta variación en la orientación hacia la protesta social como dos líneas en disputa dentro del gobierno, una moderada y otra extrema, que se termina imponiendo:

cuando estábamos en el 2018 [...] en esas mesas de negociación hubo personas del Centro Democrático que dijeron “ustedes cómo se van a sentar a negociar con esos estudiantes, no son estudiantes sino guerrilleros”, lo de siempre. Entonces tal vez esa disputa existe dentro del gobierno y desde el 2019 hasta el 2021 mi sensación y mi sentir es que ha ganado la disputa ese sector que considera que no debe haber ningún tipo de negociación (Entrevistada, ACREES).

Esto representa un cambio respecto del mandato de Santos dado que, como señalan Ávila Martínez y Morales Pérez, el gobierno de Duque, alineado al uribismo, promueve la “regulación de la protesta social y judicialización de los manifestantes” (2021, p. 12). Estos discursos, replicados por los medios de comunicación, hacen mella en la legitimidad de la protesta y tienen como contrapartida el desvío de la atención de las demandas. Los autores observan como novedad de esta “nueva derecha” el hecho de que en las protestas de 2019 adquieran protagonismo la Policía Nacional y, especialmente, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), encargados de la represión a lxs manifestantes. Esto se expresa en las redes sociales a partir de consignas como “#YoApoyoELES MAD” y de dichos de miembros del gobierno que consideran a estos agentes como “héroes de la patria” y “encargados de mantener el orden, la seguridad y el respeto por la

comunidad” (Ávila Martínez y Morales Pérez, 2021, p. 12). Por otro lado, los autores también identifican elementos de la derecha tradicional en el gobierno de Duque, fundamentalmente en lo que refiere a la agenda de la Seguridad Democrática y a la caracterización del acuerdo de paz con las FARC-EP como impune (Ávila Martínez y Morales Pérez, 2021). Esto cambia el rumbo de la estructura de oportunidades políticas habilitantes del ciclo de protestas de 2011-2018, y pone en jaque la legitimidad social que las movilizaciones habían adquirido, así como las garantías de participación política para la ciudadanía. El movimiento estudiantil colombiano da cuenta de estos cambios ante la llegada de un gobierno de derecha al poder, como veremos en el siguiente apartado.

A continuación, reconstruiremos el nuevo ciclo de movilización protagonizado por el Congreso Democrático del Pueblo (CDP), por #EleNão y por *Brasil pela Democracia e pela Vida* y por la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (ACREES) y la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior (UNEES) durante los gobiernos de Horacio Cartes, Jair Bolsonaro e Iván Duque, respectivamente. Nos centraremos en el análisis de sus demandas, de su composición social y de sus repertorios de acción.

Composición social, demandas y repertorios de acción durante el nuevo ciclo de movilización social

En Paraguay, el reclamo por las privatizaciones y contra el neoliberalismo vuelve a ser el epicentro de los descontentos y el motivo que permite coagular la acción de trabajadorxs, campesinxs y excluidxs, generando mayor visibilidad y potencia a las fuerzas de resistencia.

En este sentido, la acumulación de luchas previas y la experiencia histórica concebida por el campo popular se ve cristalizada el 28 de febrero de 2015 cuando el CDP se constituye nuevamente como “Herramienta de lucha y unidad de sectores democráticos, patrióticos y combativos, contra la política del Gobierno antinacional y

antipopular de Cartes” (Congreso Democrático del Pueblo, febrero 2015). Tal como sostiene Luis Aguayo, secretario de la MCNOC y, en ese momento, miembro del recientemente conformado CDP “Ese espíritu y ese compromiso [En referencia a la lucha de 2002] es el que hoy vuelve a reunir a organizaciones sociales y políticas para constituir de vuelta el Congreso Democrático del Pueblo y derrotar esta política de entrega y saqueo del país, combinada con represión hacia el pueblo trabajador” (*ABC Color*, 7 de enero de 2015). Como en el 2002, la plataforma tiene la vocación de coagular las demandas de los actores subalternos y, como relata el referente entrevistado “el CDP fue el imán de los actores más contestatarios y antisistema que hubo en ese momento”.

Desde el comienzo, se presenta como un espacio de convergencia. En su manifiesto constitutivo sostiene:

Hacemos un llamado amplio a todas las organizaciones democráticas y patrióticas de nuestro país a sumarse al Congreso Democrático del Pueblo, a este espacio propio del pueblo en lucha, a esta herramienta del nuevo Paraguay. Llamamos a sumarnos desde nuestras luchas y el anhelo de un país mejor. A unir fuerzas contra las políticas vendepatrias y antipopulares del gobierno antinacional, por un nuevo Paraguay sin privatizaciones ni terrorismo de Estado, con tierra, soberanía y trabajo (Congreso Democrático del Pueblo, junio 2015).

En efecto, el CDP es relanzado a partir de una amplia conformación. Primigeniamente, las organizaciones integrantes son el Partido Paraguayo *Pyahura*, el Frente *Guasú*, la Federación Nacional Campesina (FNC), la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI), la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay Sindicato Nacional (OTEP SN), *Kuña Pyrenda*, Movimiento Revolucionario Desde Abajo, Cambio para la Liberación Paraguay de Domingo Laino (del PRLA), el Frente Recoleta, la Coordinación Nacional de Niños/as Adolescentes Trabajadores (CONNATS), el Frente Patriótico Popular, la Corriente Sindical

Clasista (CSC), el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (FENAES), la Coordinadora de Camioneros del Paraguay, el Frente Estudiantil por la Educación (FEE), el Movimiento 15 de Junio, el Partido Comunista Independiente (PCI), Bañado Sur, Vencer y Vivir y la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Paraguay (COCIP).

Esta heterogénea composición social se traduce, en la etapa constitutiva, en un programa amplio de lucha que logra interpelar a gran parte del arco movimentista y progresista del país. Ello deriva en la elaboración de una consigna donde las demandas no satisfechas de gran parte de la sociedad se articulan en torno a un mismo signifi- cante: la lucha contra el neoliberalismo. En este sentido, son elo- cuentos las palabras de Eladio Flecha, secretario general del Partido Paraguay *Pyahurã*: “Todas las organizaciones coincidimos en la ca- racterización de este gobierno. Creo que allí no hubo ninguna dife- rencia” (*Última hora*, 2 de marzo de 2015). En marzo del 2015 el CDP lanza su primer manifiesto: “contra las privatizaciones y la violencia del Estado” advertía:

El Congreso Democrático del Pueblo lucha por frenar esta entrega de nuestra patria a través de las privatizaciones y su ley de alianza pú- blico privada, el endeudamiento con los mal llamados “bonos sobe- ranos” y los créditos que nos atan a los imperialismos, y así también lucha por liberarnos de la dominación de los monopolios y capitales extranjeros, principalmente norteamericanos y brasileños, que cada día invaden más nuestro país y controlan su tierra y su economía, y contra el terrorismo de Estado que asesina a dirigentes sociales y po- líticos, deja impune los crímenes y asesinatos, y protege y promueve el crimen organizado y el narcotráfico. Luchamos por la democracia, la justicia social y el respeto amplio a las libertades públicas, por los Derechos Humanos individuales y colectivos, hoy pisoteados y nega- dos por este gobierno represor (Congreso Democrático del Pueblo, junio 2015).

Asimismo, las instancias elegidas por el Congreso para visibilizarse en el espacio público también dan cuenta de su carácter heterogéneo. Las diversas formas de manifestación de la acción colectiva se ponen en funcionamiento en fechas consideradas neutrales para las organizaciones que lo conforman puesto que movilizan valores comunes y responden a banderas políticas históricamente legitimadas por gran parte de la sociedad paraguaya. Así, el 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer); el 1 de mayo (Día del Trabajador); el 15 de junio (Masacre de *Curuguaty*) y el 10 de diciembre (Día Internacional de los Derechos Humanos) fueron los momentos más álgidos de intervención pública.

Los repertorios de acción también muestran vocación de comulgar en un mismo movimiento distintas tradiciones y trayectorias organizativas. Mientras que se ponen en funcionamiento lógicas más tradicionales de intervención propias del arco político-partidario (como las reuniones, congresos y mítines) se articulan otras de carácter más disruptivo (serenatas, obras de teatro, *performance* en el espacio público) especialmente traccionadas por el colectivo de mujeres, con aquellas más ligadas a las luchas campesinas (manifestaciones, acampes), sindicales (huelgas y paro cívico) y de organizaciones sociales (es el caso de los escraches).

Aun así, la unidad no estuvo exenta de tensiones internas y en el plazo de un año parte importante de la plataforma se desmembró, mostrando las limitaciones del discurso anti neoliberal como articulador de la lucha y de las diferencias en las tradiciones de lucha. El desencuentro entre el Frente *Guasú* y el sindicalismo organizado en la CUT-A dan muestra de esto. Mientras que la organización de trabajadores denunciaba las intenciones electoralistas del Frente *Guasú* en una coyuntura signada por las elecciones municipales, el partido y varios miembros del CDP afirmaban que el sindicalismo se había convertido en una fuerza sin capacidad de incidencia y que había sido cooptada por el gobierno de Cartes (*Última hora*, 1 de marzo de 2015).

Finalmente, el CDP queda constituido por el Movimiento Revolucionario Desde Abajo, CONAMURI, la FNC con su brazo partidario (el Partido Paraguay *Pyahura*) y su brazo sindical (la Corriente Sindical Clasista); Cambio para la Liberación y la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay Sindicato Nacional (OTEP SN). Si bien se mantiene la articulación entre elementos urbanos y rurales, identitarios y clasistas, institucionalizados y no institucionalizados, este CDP dista de la experiencia aglutinadora de 2002 y, como consecuencia, su capacidad de influencia en la esfera estatal se vio fuertemente limitada.

El alejamiento del Frente *Guasú* deja en evidencia las tensiones existentes en el seno del Congreso y las limitaciones de la lógica partidaria para someterse al grado de radicalidad que presentan los movimientos de base. Esto puede observarse con mayor nitidez en las elecciones generales de 2018. En esa ocasión, el CDP presenta un programa anti-electoralista y un plan de lucha denominado “Poder Popular” en el que se pide la renuncia de Horacio Cartes y toda su línea sucesoria y el establecimiento de una Junta Patriótica de ciudadanos honorables y éticos. Al respecto, nuestro entrevistado detalla la situación: “El Frente *Guasú* salió con una nota del CDP porque las consignas eran muy antisistemas [...] demasiadas revolucionarias y el Frente *Guasú* ya no podía sostener ese tipo de consignas”. Finalmente, el partido se presenta a los comicios conformando la Gran Alianza Nacional Renovada, cuyo candidato es Efraín Alegre y donde gran parte del arco partidario se erige contra la postulación de Mario Abdo Benítez del Partido Colorado.

Sin embargo, la demanda contra la masacre de *Curuguaty* y las irregularidades en el proceso de juzgamiento de 11 campesinos es un punto de inflexión en la lucha conjunta del arco progresista y de la unidad de los movimientos sociales. A partir de esta premisa, el accionar del Congreso sufre una revitalización que rebasa los márgenes de acción hasta el momento experimentados por la plataforma. Con motivo de conmemorarse los tres años del golpe de Estado a Fernando Lugo, el CDP sostenía:

A tres años del golpe de Estado de junio de 2012, iniciado con la masacre a la resistencia de *Curuguaty*, que continuó con un juicio político ilegal e inconstitucional y se consumó con las elecciones del 2013, el Gobierno antinacional y antipopular está profundizando los problemas fundamentales de nuestro pueblo, que mantienen al Paraguay en el atraso: está ampliando la concentración de la tierra en manos de unos pocos, expandiendo el latifundio y su proyecto de agronegocio; profundiza la dependencia del país de la dominación extranjera con los créditos, el cada vez mayor endeudamiento, la entrega de Itaipú, Yacyretá, nuestros recursos naturales (agua, petróleo, tierra, energía, oro, etc.) y la total sumisión de sus políticas a los dictámenes de los imperialismos; y está “mejorando” el Estado que defiende el latifundio y la dominación extranjera reprimiendo, asesinando y encarcelando a las compañeras y compañeros que luchan por la patria, y premiando a los dominadores que saquean el país. Todo ello se plasma en su mal llamado Plan Nacional de Desarrollo, que no es más que un plan de atraso y venta de la patria, que profundiza las desigualdades de todo tipo y la expoliación de bienes naturales (Congreso Democrático del Pueblo, junio 2015).

Como puede observarse, la Masacre de *Curuguaty* como bandera logra articular sin mayores problemas las líneas internas del movimiento y posibilita ampliar el espacio de convergencia crecientemente disminuido desde su conformación. Al respecto, es elocuente el relato de nuestro entrevistado:

Lo de *Curuguaty* fue una experiencia que unió a varios sectores. El CDP fue parte de todo un movimiento ciudadano contestatario que se pronunciaba en torno a lo que fue el fenómeno de *Curuguaty* y la criminalización de los campesinos [...] ahí sí estuvimos en alianza con varios sectores, verdad. Con sectores de la iglesia, con otros movimientos campesinos, con ONG ¿no? Ahí estábamos todos [...] Era como si en ese episodio se sintetizara toda la lucha de clases. La criminalización, la lucha por la tierra, las tierras mal habidas, verdad. Todos los problemas históricos de Paraguay se sintetizan en esa experiencia. Lo de *Curuguaty* fue un giro en la historia de Paraguay porque todo el movimiento popular, no solo el CDP estaba pendiente

y organizado en torno a eso. Y el Frente *Guasú* también, hacía todo lo que tenía que hacer, lo que podía hacer como movimiento político electoral que son (Entrevistado, CDP).

Sin embargo, esta efervescencia de la lucha conjunta no se ve reflejada en la condena atribuida a los campesinos. Los jueces determinaron que los 11 procesados eran culpables de invasión de inmueble ajeno y asociación criminal. Asimismo, encontraron culpables de homicidio doloso consumado y en grado de tentativa a 9 de ellos y se establecieron condenas que oscilaron de los 30 a los 40 años de prisión.

Este hecho y una lucha que no tuvo su correlato en políticas concretas culmina en la erosión del CDP que, hacia fines de 2016 pierde de eje sus dos consignas aglutinantes: la lucha por la APP y *Curuguaity*. Sus últimas intervenciones están centradas en discusiones en torno al sistema electoral para desaparecer completamente en el año 2019, cuando presenta una capacidad de concentración mínima y una territorialización casi inexistente. En la actualidad se encuentra desactivado.

En Brasil, a partir del ciclo de protestas que comienza en 2013 durante el gobierno de Dilma Rousseff, toman mayor presencia pública las demandas que pueden ser englobadas como “liberal-punitivas”: reducción de impuestos, reclamos por mano dura de las Fuerzas de Seguridad, descontento ante la ampliación de derechos sociales y económicos por parte de las élites y sectores concentrados de la economía. Como destacan Natalucci y Ferrero (2021) este tipo de reclamos convive con las demandas de movimientos sociales rurales y urbanos, indígenas, estudiantes y de género que se sumaron a una plataforma que continúa reclamando la ampliación de derechos y protección del ambiente.

En este marco de expansión de movimientos y acciones de protesta, se da el ascenso al poder de Bolsonaro. Durante el gobierno provisorio de Michel Temer (2016-2018), miles se movilizan ante el avance

sobre derechos sociales y laborales y las políticas de privatización y ajuste.

Con la candidatura de Jair Bolsonaro y las posibilidades ciertas de que alcanzara el poder, sectores urbanos y rurales progresistas se ponen en alerta. Sin embargo, el ciclo de movilizaciones comienza meses antes, con la presencia de mujeres negras, trabajadoras y faveladas en las calles de las grandes ciudades del litoral atlántico: durante 2017, el país había registrado 4473 femicidios, la mayoría de ellas (70%) mujeres negras sin acceso a la educación formal (Gentili, 2018).

El punto más álgido de las movilizaciones ocurre luego del 14 de marzo de 2018, día en que es asesinada la militante política y por los derechos sexuales y reproductivos Marielle Franco. La parlamentaria carioca pertenecía al Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y en los años previos había tenido un rol central en la denuncia de los abusos policiales y la intervención militar de Río de Janeiro.

En este contexto, durante la campaña electoral que lleva a Jair Bolsonaro a la presidencia comienza a tomar forma el movimiento *#EleNão*, nutrido principalmente por negrxs, mujeres y disidencias sexuales, que ven amenazadx sus derechos ante el discurso homofóbico y racista del candidato del Partido Social Liberal (PSL), apoyado por sectores conservadores de la sociedad y la Iglesia Evangélica. En los orígenes de las acciones de protesta del Movimiento, además de la presencia mayoritaria de mujeres, se encuentran grupos y actores sociales tradicionales, como el Movimiento de los Trabajadores sin Tierra (MST), el Movimiento de las Presas Afectadas (MAB), el Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA), organizaciones LGBTIQ+ y disidencias sexuales y otras organizaciones de la sociedad civil.

#EleNão presenta diferentes etapas de acción colectiva: un primer momento enlazado con un pronunciamiento virtual en las redes sociales protagonizado por mujeres brasileñas que se manifiestan en contra de la candidatura de Jair Bolsonaro y, un segundo momento, caracterizado por movilizaciones masivas integradas por diferentes grupos y actores sociales, sindicales y de género.

Si bien este movimiento tiene un rol central en las manifestaciones públicas y acciones de protesta en las calles de las grandes ciudades de Brasil, su origen se remonta a las redes sociales. En efecto, *#EleNão* –un movimiento diverso y heterogéneo– logra convocar y visibilizar los reclamos de mujeres, disidencias y la juventud de diferentes sectores sociales, religiosos y partidarios. Con un objetivo claro, oponerse a la candidatura de Bolsonaro, alcanza la representación social que excede los límites del sindicalismo o el PT. En este sentido, el sistema electoral brasileño no pudo canalizar las demandas que expresaba el movimiento.

#EleNão comienza como un grupo privado de la red social *Facebook* llamado *Mulheres Unidas Contra Bolsonaro* (MUCB, septiembre 2021) que actualmente cuenta con más de 2 millones y medio de *likes* y luego se viraliza a través de servicios de mensajería instantánea como *Whatsapp* y *Telegram*. El contexto sociohistórico de surgimiento está enmarcado por la campaña electoral que se lleva a cabo en 2018, en donde Jair Bolsonaro se postula para presidente de Brasil. En este sentido, el lema *Ele Não* (Él no) se consolida como un movimiento que se opone a la postura neoconservadora que manifestaba el candidato en términos de derechos y libertades.

El MUCB nace como una iniciativa de una publicista y militante por los derechos de las mujeres y LGTBIQ+ de Salvador de Bahía, Ludimilla Teixeira. En sus comienzos, el grupo se propone desmentir las acusaciones de Jair Bolsonaro contra el movimiento de mujeres. Desde sus inicios, el espacio de encuentro en las redes debe atravesar las dificultades de la virtualidad: *hacks* y bloqueo de cuentas que impiden la circulación de la información y el debate. Teixeira, en una entrevista publicada en sus redes sociales, destaca que, si bien nacieron como un punto de encuentro virtual, son mujeres defendiendo sus derechos políticos: “No somos robots, somos mujeres reales que creemos en el ideal, mujeres que estamos dispuestas a luchar para frenar esta candidatura fascista” (*Mulheres Unidas Contra Bolsonaro*, 17 de septiembre de 2018).

#EleNã constituye un espacio de canalización de las demandas de la sociedad civil brasileña ante las políticas de Jair Bolsonaro. Sin embargo, no puede traducir su peso al campo político-electoral. Una de las particularidades del movimiento es que sus expresiones alcanzan gran difusión a través de las redes sociales. Como relata uno de los informantes clave de la investigación, el acceso a la información en los sectores populares y de clase media, se da principalmente a través de la mensajería instantánea y las listas de difusión (mecanismo utilizado también para la difusión de información falsa que abo-
nó a la candidatura de Jair Bolsonaro).

En marzo de 2020, con la declaración de la pandemia por Covid-19 la situación global cambia y Brasil no es ajeno a ello. Las lógicas de la protesta social y las movilizaciones callejeras debieron mutar. En este marco, el gobierno de Jair Bolsonaro fue reticente a la aplicación de medidas sanitarias y humanitarias para evitar la expansión del virus. Brasil es uno de los países de la región que menos medidas ha tomado para detener la propagación del virus: las actividades económicas no tuvieron limitaciones y las fronteras continuaron parcialmente abiertas (OBLAT, 2020). Rápidamente, la pandemia comenzó a afectar la vida y el trabajo de los sectores más empobrecidos de la sociedad.

En este contexto, ante el pronunciamiento del ajuste económico y la limitación de derechos sociales a vastos sectores, en junio de 2020 comienza a articularse en las redes sociales el movimiento *Brasil pela Democracia e pela Vida*, un espacio que nuclea una alianza entre más de 70 organizaciones de la sociedad civil: entidades nacionales, movimientos sociales, articulaciones pro-democráticas, organizaciones científicas y académicas, colectivos populares y organizaciones no gubernamentales, generando un entrelazamiento urbano y rural. Por otro lado, teniendo en cuenta el contexto sanitario ocasionado a partir del Covid-19, el movimiento se gesta en las redes sociales, donde genera materiales para difusión, entrevistas, charlas, festivales y otros recursos que permitieron su circulación masiva a través de las

redes sociales y la mensajería instantánea. El repertorio de acción, alejado de las calles, se reinventa.

El principal desencadenante para su conformación es el contexto social, político y económico que atraviesa el país, agravado por la pandemia. Surge buscando unidad en defensa de la democracia –amenazada por el ataque a las instituciones–, el Estado de Derecho Democrático y los derechos de los ciudadanos. En su declaración fundacional destacan la defensa de las vidas amenazadas por la descoordinación del gobierno federal en el combate de la pandemia, agravando la ya compleja situación sanitaria y económica. Asimismo, y en sintonía con el *#EleNã*, este movimiento se opone al gobierno federal, a la gestión de Jair Bolsonaro y busca enfrentar el ajuste neoliberal. En palabras de uno de los informantes clave, *Brasil pela democracia e pela vida* es concebido como un frente amplio de expresiones de diferentes vertientes políticas y ciudadanas y que –en el contexto de la pandemia– nace en las redes sociales.

En un principio, se vale de la tracción de personas famosas con llegada a amplios sectores sociales y diversos públicos a partir de acciones definidas como “tácticas”. Sin embargo, destaca que, en todo momento, las decisiones políticas no son tomadas en el marco del frente, sino que cada una de ellas mantiene su unidad de acción: “cada colectivo con su autonomía, con su forma de trabajar”.

Las elecciones municipales de 2020 abren un nuevo panorama, y permiten a los movimientos presentados salir nuevamente a las redes. Durante las últimas elecciones, *#EleNã* constituye un espacio para la presentación y visibilización de candidatas mujeres, negras y disidencias sexuales. A través de las redes sociales, publicaron el siguiente comunicado:

O grupo Mulheres Unidas Contra Bolsonaro / Mulheres Unidas pelo Brasil quer apoiar a maior candidatura de mulheres nas eleições de 2020 em todos os cantos do país, de norte a sul, onde houver petição, estaremos lá!

Preocupadas com o avanço do fascismo e com o clima de austeridade na atual política brasileira, expressamos aqui nosso desejo de atuar diretamente nas campanhas das mulheres feministas de esquerda que pretendem disputar as eleições municipais de 2020.

Queremos promover a interação e divulgação dessas pré-candidaturas aos Conselhos e Municípios de todo o Brasil. Para expandir a soma e multiplicar nossa força, criamos esta forma. No vermelho somos muito fortes!

Portanto, se você é candidato às ELEIÇÕES 2020, preencha e divulgue para que possamos melhor identificar e definir as estratégias de comunicação a adotar. O lugar da mulher é na política e onde ela quiser! (Mulheres Unidas Contra Bolsonaro, Septiembre 2021)

A partir de la exploración y el análisis de estos dos movimientos sociales, concluimos que tanto *Brasil pela Democracia e pela Vida* como *#EleNão*, son movimientos sociales que están atravesados y configurados por el avance y la evolución de las redes sociales. Sin embargo, existen diferencias respecto de la masividad de cada uno. Mientras que el primero nace como una reivindicación de las mujeres y disidencias brasileñas para transformarse en un movimiento democrático de masas que ocupe las calles durante la campaña presidencial de 2018, el segundo –en contexto de la pandemia por Covid-19– no pudo superar las fronteras de la virtualidad, y su accionar no se ve reflejado en las protestas contra el gobierno de Jair Bolsonaro del primer semestre de 2021 en las calles de las grandes ciudades del país.

Sin embargo, la virtualidad les permite a ambos movimientos involucrarse dentro del campo político mediante estrategias digitales, lo que autores como Toret llaman “tecnopolítica”. Además, les permite reconfigurarse en el campo de la acción colectiva de una manera innovadora. Al mismo tiempo, las redes sociales habilitan a las organizaciones para llegar a otros puntos de América Latina que permiten a *#EleNão* tejer redes con movimientos de mujeres y disidencias en otros países de la región. La “Campanha latina” (Campanha latina, septiembre de 2021) lanzada por el movimiento de mujeres brasileño

a través de “Midia Ninja” logra articular y promover la participación de mujeres en las campañas electorales de Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia durante 2020 y 2021.¹²

Los referentes empíricos del movimiento estudiantil colombiano seleccionados para esta investigación son organizaciones de formación reciente, aunque dan cuenta de la larga tradición de lucha, como mencionamos en el apartado anterior. La Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (ACREES) surge en 2015 con el objetivo de defender la educación superior pública, buscando nuclear al sector representativo estudiantil de las universidades e instituciones técnicas y tecnológicas de Colombia. La Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (UNEES) se forma en 2018 con el propósito de alzarse contra el continuo desfinanciamiento del sistema educativo, en el momento en el que el Congreso Nacional anuncia el Presupuesto General de la Nación (UNEES Colombia, 9 octubre de 2018), y con los objetivos de defender la educación pública, gratuita y de calidad, y articular la lucha del ámbito público y privado mediante la conformación de una plataforma nacional (UNEES Colombia, 14 febrero de 2019) que incluya a los institutos técnicos, tecnológicos y universitarios (Casas Mogollón, 16 de enero de 2019).

Dos aspectos relevantes en lo que refiere a la conformación del movimiento estudiantil en Colombia tienen que ver, primero, con el acceso a la educación superior, restringido a los sectores populares hasta mediados del siglo XX y, segundo, con el temprano surgimiento de una gran cantidad de instituciones de gestión privada. Ambos, elementos de larga data, hacen a la identidad del movimiento estudiantil en la actualidad. Con respecto al acceso a la educación superior, Leal Buitrago plantea que se encuentra vinculado al desarrollo tardío del capitalismo colombiano y el lento proceso de modernización del país (fundamentalmente en lo que refiere a la urbanización,

¹² El documento “Lineamientos para la acción” abona respecto de las estrategias digitales y la integración regional.

una débil burguesía industrial y el crecimiento del mercado interno) que se observan a partir de los años 1950, lo que otorga un rasgo atípico respecto de otros países de América Latina. Así, el autor señala que hasta 1940 la posibilidad de estudiar en la universidad era asequible sólo a las élites dominantes (1988, p. 50), mientras que el crecimiento de las universidades privadas, entre otras cuestiones, es propiciado por los continuos episodios de violencia política que atraviesa el país durante el siglo XX. En este sentido, procesos socio-históricos como la Violencia (1948-1958) y la conformación del Frente Nacional (1958-1973), con su consecuente clausura a la participación política partidaria de sectores de la izquierda, también tienen su impacto sobre el devenir de las universidades estatales. La internalización del conflicto armado, la represión del Estado sobre los movimientos de izquierda que allí se despliegan, así como la intervención en la dirección de estas instituciones, confluyen en la expansión de las universidades privadas, que para 1965 superan a las de gestión pública (Leal Buitrago, 1988, p. 51). Así, las privadas cuentan tempranamente sectores medios, que se ven afectados por las políticas neoliberales implementadas en los años 1990 y se incorporan de manera activa al movimiento estudiantil. Es por esto que, en lo que refiere a su composición social, para abordar la conformación de la ACREES y la UNEES es necesario tener en cuenta a los representantes de la educación superior de gestión tanto pública como privada. Tal como expresa una de las referentes de ACREES entrevistadas:

Hoy en día la mitad de los estudiantes de la educación superior están en universidades privadas, entonces un movimiento estudiantil que no piense en las universidades privadas está super incompleto. Son los representantes estudiantiles de las universidades privadas los que empiezan a convocar encuentros de representantes estudiantiles (Entrevistada, ACREES).

La percepción que se tiene desde el movimiento estudiantil sobre el acceso a la educación superior privada la relaciona no con un acto voluntario, sino con la falta de alternativas para el ingreso al ámbito público:

El sistema de educación superior en Colombia está diseñado para que se promueva el acceso a las instituciones de educación superior privadas, bajo un criterio absurdo de libre mercado. De tal forma que usted es absolutamente libre de elegir dónde quiere estudiar, pero no era tan así. El sueño de la mayoría de nosotros había sido estudiar en una universidad pública (Entrevistada, UNEES).

Asimismo, la mercantilización de la educación superior es vista como una amenaza, dado que “el carácter privado les confiere la posibilidad de restringir un poco más las libertades de organización, participación, movilización, y eso cercena la participación en las organizaciones sociales de los jóvenes que ingresan” (Entrevistada, UNEES) a las universidades privadas. Además, el movimiento estudiantil debe sortear algunos de los puntos que distancian a quienes forman parte de las instituciones públicas y privadas. Algunas de las demandas de los estudiantes de las privadas no son percibidas como tales por el resto:

Hay un gran porcentaje de estudiantes de universidades públicas que no comprenden cuál es la razón de participación en el movimiento estudiantil de un estudiante de universidad privada. [La UNEES realizó un] aporte político a la hora de ampliar un poco a los estudiantes de la universidad pública ese otro universo de casos complejos. Es decir, se nos estaba escapando una línea muy importante de análisis en cuanto al endeudamiento, y lo que está pasando con el ICETEX¹³ que no solía ser una bandera muy común (Entrevistada, UNEES).

¹³ El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) es una entidad financiera del Estado que otorga créditos educativos a la población bajo criterios que apelan a quienes tienen menores posibilidades económicas de acceder a la educación superior y presentan buen desempeño académico. A partir de la Ley 1002 de 2005 se transformó en una entidad financiera de naturaleza especial con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio vinculado al Ministerio de Educación Nacional (ICETEX, s/f). Es repudiado por los estudiantes de instituciones de educación superior privadas ya que “para nosotros es un banco más que se ha dedicado a generar deuda, y a sumir a cada estudiante que asume esa responsabilidad económica a una carga por al menos veinte años, por el resto de su vida laboral casi, de tal forma que usted pague con creces el ejercicio de un derecho” (Entrevistada, UNEES).

A pesar de las dificultades para incorporarse a la movilización social, el estudiantado de las universidades privadas ha tomado iniciativa en las movilizaciones, asociándose a partir de la creación de la UNEES en 2018 y tuvo un amplio protagonismo en el paro nacional de 2019 y en las protestas que siguieron.

Con la asunción de Duque al poder en 2018, la protesta social entra en un paréntesis que se puede interpretar como un período de evaluación por parte de los movimientos, en el que se analizan las nuevas políticas del nuevo gobierno y, en función de ellas, se definen los programas de acción a seguir. El movimiento estudiantil es una excepción en este sentido ya que apenas asumido Duque, en octubre de 2018, inicia un paro nacional universitario que dura dos meses y es expresión de la demanda histórica relacionada con la crisis presupuestaria del sistema educativo. Los sectores que impulsan esta medida contra del gobierno nacional se articulan en el Frente Amplio por la Educación Superior, que aglutina a organizaciones estudiantiles como ACREES y UNEES, así como también a agrupaciones de docentes. Desde UNEES establecen que la mirada estratégica del momento de la convocatoria de aquel paro estaba enfocada en el Presupuesto para 2019, dado que se encontraban en “un punto de inflexión en ese momento: para el 2019 las universidades públicas en Colombia no tenían con qué funcionar [...] Llegamos a ese punto de inflexión de ¿qué va a pasar? O nos organizamos este año o en el 2019 no hay con qué funcionar” (Entrevistada, UNEES). Así, el movimiento estudiantil es el sector que tempranamente se erige contra el gobierno de Duque, quien en ese entonces convoca a un diálogo y en diciembre logra desactivar momentáneamente la protesta, luego de la firma de un acuerdo de compromiso donde se reconoce algunos de los puntos de protesta.

Respecto de las demandas del movimiento estudiantil desde 2018, hay confluencia entre la ACREES y la UNEES. Desde ambas organizaciones coinciden en que la agenda de protesta no se limita a las problemáticas puntuales de la educación, sino que los diagnósticos que trazan son amplios y abarcan temáticas estructurales de fondo:

Uno de los grandes avances del movimiento social en los últimos tres años es la posibilidad de tener un espacio de coordinación entre los distintos sectores. Una cosa es los estudiantes saliendo a marchar por un tema de educación como fue en 2018, pero lo que pasó en 2019, 2020 y 2021 es que eso se volvió mucho más político. En el sentido de que los estudiantes no estábamos marchando por la educación superior solamente. ¿Por qué se estaba marchando? Por la propuesta de reforma laboral de Duque, por la privatización del sistema público de pensiones y también por la vida de los líderes y lideresas sociales, que estaban siendo amenazados. Entonces, yo creo que eso fue elevar mucho el nivel del movimiento social en el sentido de que las reivindicaciones no eran solo gremiales (Entrevistada, ACREES).

En línea con lo planteado por la ACREES, desde la UNEES conciben la movilización estudiantil:

No como proceso alejado, externo o marginado del resto de las discusiones del país, porque esto es mucho más que un proyecto en favor de una nueva estructuración del sistema de educación superior, sino en favor de un proyecto de país. Porque, insisto, también discutimos la priorización sobre el Ministerio de Defensa, sobre temas de política exterior, sobre el resto de los temas de la agenda pública nos incumbe. Y eso supone que debemos estar articulados como movimiento social (Entrevistada, UNEES).

Se observa que la visión de ambas apela a la necesidad de cambios de fondo en la estructura social y política de Colombia, así como también esbozan demandas puntuales referidas al recrudecimiento de la represión desde el retorno del uribismo al poder. En este sentido, uno de los reclamos en 2019 fue el desmonte de los ESMAD.

En lo relativo a la posibilidad de ampliar la participación del movimiento estudiantil hacia objetivos electorales o bien habilitar puntos de contacto con partidos políticos, observamos diferencias entre ambas organizaciones. Por un lado, la UNEES descarta esta opción, aunque muchos de sus miembros militan en estas instancias:

Si bien muchos de nosotros creemos efectivamente en la participación electoral, muchos de nosotros hacíamos o hacemos parte de partidos políticos, eso no podía llevarse al proceso de organización social. La UNEES fue sumamente radical en diferenciar la organización social de la organización política electoral [...], de ninguna forma vamos a permitir que el esfuerzo y la organización estudiantil sirva para alimentar los intereses políticos de determinado sector (Entrevistada, UNEES).

Mientras que esta organización registra un descreimiento en la posibilidad de transformar las demandas del movimiento estudiantil en programas político-partidarios o de articular directamente con espacios políticos institucionalizados, desde ACREES muestran menos escepticismo sobre la participación política-partidaria:

Yo creo que el movimiento social sí tiene que hacer ese salto, porque si seguimos con esa prevención frente a la participación política, van a seguir ganando ellos [...] Necesitamos combinar esas movilizaciones con la participación política, porque de igual esos puestos se van a llenar. Si no los llena un compañero o una compañera con la que yo he marchado toda mi vida, aguantando sol, agua, gases, lo va a llenar alguien de Cambio Radical, lo va a llenar alguien del Centro Democrático. Entonces creo que tenemos que expresar esa agenda del movimiento social en las urnas (Entrevistada, ACREES).

Si bien desde ACREES plantean la necesidad de trasponer las lógicas del movimiento social a la contienda electoral, muestran reparos en “suscribir a un movimiento político particular también es un error porque eso no permite que sea amplio, que pueda vincular a toda la gente que coincida en todas sus banderas reivindicativas” (Entrevistada, ACREES). En este sentido, sostienen “que el movimiento social y el movimiento estudiantil se deban suscribir a un partido particular o a un sector particular del espectro político me parece absolutamente equivocado” (Entrevistada, ACREES).

Por otro lado, la visión del movimiento estudiantil sobre otros movimientos sociales presenta algunos puntos de interés. A partir

de lo indagado, se puede esbozar que perciben su construcción de consensos y sus repertorios de acción como distintos a los de movimientos sociales tradicionales, como los sindicatos. En este sentido, asocian el principio de horizontalidad como una herramienta para la construcción de consensos en torno a las demandas y estrategias:

Teníamos muy claro qué queríamos ser nosotros como movimiento, nosotros no fuimos una organización social más. No fuimos un sindicato más que tiene sus miembros contabilizados en una lista, con los datos personales de todo el mundo, fuimos, creo, en ese momento, un verdadero movimiento. Había verdaderamente una agenda consensuada, teníamos un verdadero acuerdo (Entrevistada, UNEES).

A pesar de las diferencias sobre la construcción de los consensos internos, el movimiento estudiantil valora las alianzas programáticas que se pueden entablar con estos otros movimientos en coyunturas como la del paro nacional de 2019. Incluso se destaca la voluntad de establecer alianzas con movimientos cuyas dinámicas de protesta y lógicas de participación no son del todo compartidas ni similares a las del movimiento estudiantil:

Siempre se fijó como una línea muy importante la articulación con otros gremios del movimiento social. El movimiento estudiantil siempre ha tenido una cercanía muy especial y una coincidencia política significativa con el movimiento indígena [...] Con las centrales obreras hay una articulación difícil, un poco por las prácticas clásicas del sindicalismo, en las que podemos disentir, pero sin duda había disposición también. Con el movimiento feminista, había organizaciones feministas que nutrieron la comisión de género de la UNEES, y que propiciaron discusiones muy pertinentes a la hora de hacer extensivas las luchas del movimiento feminista en el marco de la disputa de un sistema de educación superior (Entrevistada, UNEES).

Siguiendo con los repertorios de acción, el tópico sobre la violencia en las protestas es enunciado por referentes del movimiento

estudiantil, identificando a los actores que llevan a cabo este tipo de prácticas. Los actores responsabilizan al gobierno de Duque por la represión de las fuerzas de seguridad durante los paros y movilizaciones de 2019 y 2020; y atribuyen a los excesos en la represión la respuesta también violenta por parte de algunos de los manifestantes. Sobre este punto se compara la coyuntura actual con la situación política durante las movilizaciones de 2011 encabezadas por la MANE, donde el uso de la violencia no era parte de los repertorios de acción, dado que el gobierno tampoco privilegiaba estos mecanismos de represión en ese entonces:

La MANE inició unas prácticas muy pacifistas que llevaron a que fuese más sencillo el acercamiento con la sociedad colombiana. Y no siento que la MANE haya recibido el mismo nivel de represión que nosotros. Pero en el 2018, en la medida en que esa violencia se exacerbó, llevaron a los estudiantes a un límite, y en ese límite pues lamentablemente tuvieron que responder con beligerancia y con vías de hecho (Entrevistada, UNEES).

En síntesis, en el caso de Colombia el movimiento estudiantil evidencia un nuevo ciclo de movilización, a partir de 2011, que revitaliza las narrativas antineoliberales y que, a partir de 2018 con la llegada de las nuevas derechas al poder tras el triunfo electoral de Duque, adquiere características específicas vinculadas con la represión de la protesta por parte del Estado, herramienta que había entrado en un paréntesis bajo el mandato de Santos y la firma del Acuerdo de Paz. No obstante, este nuevo ciclo no se ha podido plasmar en un programa político integral, sino que existe una fuerte atomización de los NMS, con confluencias efímeras ante problemáticas puntuales como la reforma impositiva (2021) o la crisis presupuestaria (2019). A pesar de la imposibilidad de establecer alianzas duraderas y de canalizar sus demandas hacia la participación política partidaria o electoral, se observa que los NMS, ante los conflictos coyunturales que los empujan a las calles, reeditan discursos y narrativas antineoliberales en los que reconocen causas estructurales y transversales a los distintos

movimientos que perduran en el tiempo. En ese sentido, sus diagnósticos sobre las problemáticas sociales que los afectan coinciden entre sí, mientras que sus diferencias se expresan en lo relativo a las formas y los programas de acción para conquistar dichas demandas.

Conclusiones

Tal como hemos advertido, los NMS y su acción colectiva como objetos de análisis se constituyen al calor de los procesos sociales y políticos, adquiriendo formas y dinámicas específicas –que se han visto modificadas por la pandemia de Covid-19–. A través del análisis sociohistórico y comparado de actores concretos en coyunturas específicas hemos podido indagar en el desarrollo de un nuevo ciclo de movilización. Para ello hemos desarrollado una estrategia metodológica comparativa y utilizado diversas fuentes con el objetivo de articular un estudio con un robusto sustento empírico y una perspectiva conceptual sólida.

Confirmamos que tras el ascenso de los gobiernos de Horacio Cartes (2013-2018) en Paraguay, de Jair Bolsonaro (2018) en Brasil y de Iván Duque (2018) en Colombia, se recrea un dispositivo basado en la “acumulación” de luchas previas protagonizado por los NMS y se inicia un nuevo ciclo de movilización social. En términos generales, este nuevo ciclo muestra algunas características recurrentes en los tres casos estudiados: una composición social heterogénea (ya sea de forma orgánica o por la conformación de alianzas); la toma del espacio público por parte de los movimientos sociales a partir de la multiplicación de las manifestaciones masivas en las calles y nuevas expresiones a través de las redes sociales y canales digitales iniciando un nuevo carácter de la acción colectiva en el marco de la pandemia por Covid-19. También, revitalizan una narrativa antineoliberal conjugada con un discurso identitario y, finalmente, articulan orgánicamente componentes urbanos y rurales.

Tras el estudio empírico de los casos abordados hemos observado que las características asumidas por este fenómeno responden a condicionantes sociohistóricos propios de los procesos políticos y sociales en cada país. En Paraguay, la transición democrática iniciada en 1989 tiene como principales agentes del cambio social a los movimientos sociales organizados y unificados, lo que pudo evidenciarse en la constitución del CDP en 2002 y en la capacidad para frenar el proceso de privatizaciones durante el período neoliberal. Posteriormente, los sectores subalternos organizados en distintos movimientos de la sociedad civil vieron sus demandas cristalizadas en la plataforma electoral que llevó a Fernando Lugo al gobierno en 2008. Ello se traduce en una revitalización de la lucha y en una creciente efervescencia social. Sin embargo, el golpe de Estado de 2012 reedita el proyecto neoliberal y tras la victoria de Horacio Cartes en 2013 se inicia un proceso de liberalización y desregulación de la economía que se plasma en la promulgación de la APP y en la reforma de la Ley de Seguridad Interna para asegurar su aplicación. La principal consecuencia es la reunificación del campo popular y la constitución de un nuevo CDP conformado por gran parte de los movimientos sociales paraguayos.

En Brasil, resulta vital advertir que, a diferencia del caso paraguayo, el ciclo de protesta iniciado en 2013 se diferencia de las movilizaciones experimentadas en el proceso de redemocratización tras la dictadura (1984-1985) y durante el *impeachment* contra Fernando Collor de Mello (1992). Durante este periodo, la articulación de viejos y nuevos actores es producto del creciente distanciamiento con el PT y la izquierda tradicional, por lo que toma un carácter autónomo o antagonista del partido de gobierno. Un dato novedoso es que a la participación de actores sociales tradicionales (sindicatos y organizaciones territoriales) se incorporan las clases medias urbanas. En 2016 –tras el *impeachment* a Dilma Rousseff, el fallido gobierno de Michelle Temer y la proscripción de Lula Da Silva– obtiene la victoria el ex capitán del Ejército, Jair Bolsonaro, quien contaba con el apoyo de sectores ligados a los grandes empresarios agrícola-ganaderos,

sectores conservadores de la Iglesia Evangélica y una serie de partidos regionales. El presidente electo logra capitalizar las movilizaciones sociales de la clase media y el rechazo al PT y al sistema de partidos en general y constituye su poder a partir de la producción de “enemigos” que le permitieron reforzar su identidad, forjando un discurso homofóbico, xenófobo y contra los derechos de las mujeres y disidencias sexuales. Asimismo, lleva a cabo políticas económicas y sociales excluyentes y represivas. Como consecuencia, puede observarse una consolidación de la acción colectiva protagonizada por el movimiento de mujeres, los movimientos sociales urbanos de estudiantes y rurales ligados a expresiones de izquierda.

Si bien en Colombia se experimenta una continuidad de la hegemonía neoliberal, los ciclos de protestas no están exentos de transformaciones. El ascenso de Álvaro Uribe Vélez en 2002 está marcado por su Política de Defensa y Seguridad Democrática, bajo la cual se transforma a las FARC en el “gran enemigo” de Colombia. Esta narrativa le permite la profundización de las políticas neoliberalismo, lo que comienza a confluir en una reactivación de la protesta social. En este contexto, el movimiento estudiantil colombiano atraviesa un proceso de recomposición. Con la llegada de Manuel Santos al gobierno se mantiene la política económica neoliberal pero existe un redireccionamiento en torno a la política sobre las FARC. En este contexto, la movilización social sufre transformaciones a partir de las cuales se legitima como forma de participación política. Entre 2010 y 2018, producto del inicio de las negociaciones del acuerdo de paz, se experimenta un incremento de las manifestaciones y una diversidad en torno a las demandas que las movilizan: educación, los derechos laborales, el medio ambiente, la defensa del campo, los derechos humanos, indígenas y la paz. La reforma regresiva de la ley de Educación Superior propuesta por el gobierno funge de plataforma para que el movimiento estudiantil amplíe sus márgenes de acción, logrando movilizaciones nacionales que convocaban no solo a estudiantes y profesores, sino también a la ciudadanía en general. Finalmente, con el ascenso de Iván Duque, alineado al uribismo, se

promueve la regulación de la protesta social y la judicialización de los manifestantes, lo que inicia un nuevo ciclo de movilización.

En cuanto al análisis de la composición social, de las demandas y de los repertorios de acción del Congreso Democrático del Pueblo (CDP), de *#EleNão*, de *Brasil pela Democracia e pela Vida*, de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (ACREES) y de la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior (UNEES) durante los gobiernos de Horacio Cartes, Jair Bolsonaro e Iván Duque pudimos dar cuenta de sus rasgos comunes al tiempo que nos centramos en sus diferencias.

En Paraguay, durante el año 2015 el reclamo por las privatizaciones, contra el neoliberalismo y la violencia estatal vuelve a ser el epicentro de las protestas, generando mayor visibilidad y potencia a las fuerzas de resistencia. La reedición del CDP es expresión de ello. El espacio se presenta como un punto de convergencia conformado por sindicatos, organizaciones sociales, movimientos sociales, de mujeres, movimiento campesino y partidos políticos. Esta heterogénea composición social se traduce, en la etapa constitutiva, en un programa amplio de lucha que lograba interpelar a gran parte del arco movimentista y progresista del país y en una multiplicidad de repertorios de acción. Hemos podido demostrar que la unidad expuesta en el CDP no está exenta de tensiones internas, mostrando las limitaciones del discurso antineoliberal como articulador de la lucha.

En una segunda etapa, la demanda contra la masacre de *Curuguaty* se erige como un punto de inflexión en la acción conjunta del arco progresista y de la unidad de los movimientos sociales. A partir de esta premisa, el accionar del Congreso sufre una revitalización que rebasa los márgenes de acción hasta el momento experimentados por la plataforma. En efecto, la Masacre de *Curuguaty* como bandera logra articular sin mayores problemas las líneas internas del movimiento y posibilita ampliar el espacio de convergencia crecientemente disminuido desde su conformación. Sin embargo, esta efervescencia de la lucha conjunta no se ve reflejada en la condena

atribuida a los campesinos, lo que culmina en la erosión del CDP que, hacia fines de 2016, pierde de eje sus dos consignas aglutinantes.

Si el nuevo ciclo de movilización en Paraguay mantiene varios elementos del ciclo de protesta previo (nos referimos a composición, canales de comunicación, repertorios de acción y demandas), el caso brasileño muestra una importante diferencia en este sentido, especialmente a partir de las nuevas formas de manifestación y nuevos canales de comunicación, así como en la expresión de consignas con un componente fuertemente identitario.

A partir del ciclo de protestas que se inicia en 2013 durante el gobierno de Dilma Rousseff, toman mayor presencia pública las demandas que pueden ser englobadas como liberal-punitivas, las que conviven con las demandas de movimientos sociales rurales y urbanos, indígenas, estudiantes y de género que se suman a una plataforma que continúa reclamando la ampliación de derechos y protección del medio ambiente. Dos movimientos son de importancia durante este contexto de expansión de las acciones de protesta. Por un lado, durante la campaña electoral que lleva a Jair Bolsonaro a la presidencia, comienza a tomar forma el movimiento *#EleNãõ*, constituido principalmente por negrxs, mujeres y disidencias sexuales, que ven amenazados sus derechos ante el discurso homofóbico y racista del candidato del Partido Social Liberal (PSL), apoyado por sectores conservadores de la sociedad y la Iglesia Evangélica. En los orígenes de las acciones de protesta del movimiento, además de la presencia mayoritaria de mujeres, se encuentran grupos y actores sociales tradicionales, como el Movimiento de los Trabajadores sin Tierra (MST), el Movimiento de las Presas Afectadas (MAB), el Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA), organizaciones del campo LGBTIQ+ y disidencias sexuales y otras organizaciones de la sociedad civil. Si bien este movimiento tiene un rol central en las manifestaciones públicas y acciones de protesta en las calles de las grandes ciudades de Brasil, su origen se remonta a las redes sociales. Por otro lado, *Brasil pela Democracia e pela Vida* se gesta en un contexto sanitario ocasionado a partir del Covid-19, a través de las redes sociales,

generando materiales para difusión, entrevistas, charlas, festivales y otros recursos que permiten su circulación masiva a través de las redes sociales y la mensajería instantánea. Este espacio nuclea una alianza entre más de 70 organizaciones de la sociedad civil: entidades nacionales, movimientos sociales, articulaciones pro-democráticas, colectivos populares y organizaciones no gubernamentales, generando un entrelazamiento urbano y rural.

En el caso colombiano, la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (ACREES) surge en 2015 con el objetivo de defender la educación superior pública, buscando nuclear al sector representativo estudiantil de las universidades e instituciones técnicas y tecnológicas de Colombia. Mientras que la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (UNEES) se forma en 2018 con el propósito de alzarse contra el continuo desfinanciamiento del sistema educativo, cuando el Congreso Nacional anunciaba el Presupuesto General de la Nación, y con los objetivos de defender la educación pública, gratuita y de calidad, y articular la lucha del ámbito público y privado mediante la conformación de una plataforma nacional que incluya a los institutos técnicos, tecnológicos y universitarios.

El paro nacional universitario de 2018 aglutina a ambas organizaciones y habilita la constitución de una agenda de protesta que no se limita a las problemáticas puntuales de la educación. A partir de allí, los diagnósticos que trazan son amplios y abarcan temáticas estructurales de fondo, evidenciando un nuevo ciclo de protesta que revitaliza las narrativas antineoliberales y que adquiere características específicas vinculadas con la represión de la protesta por parte del Estado, herramienta que había entrado en un paréntesis bajo el mandato de Santos y la firma del Acuerdo de Paz.

Sin embargo, el principal punto de divergencia se da en torno a la posibilidad de transformar las demandas del movimiento estudiantil en programas político-partidarios o de articular directamente con espacios políticos institucionalizados. Por otro lado, se percibe una construcción de consensos y de repertorios de acción que se

distancia de los promovidos por movimientos sociales tradicionales, como los sindicatos. En este sentido, asocian el principio de horizontalidad como una herramienta para la construcción de consensos en torno a las demandas y estrategias.

Para culminar, queda indagar en diversos aspectos de este nuevo ciclo de acción colectiva. En el análisis propuesto, se enfatiza en el carácter de las demandas, en la composición social y en los repertorios de acción. Resta investigar en los niveles de institucionalización de estos movimientos o en la circulación de trayectorias individuales y colectivas en movimientos u organizaciones de otro tipo: partidos políticos, sindicatos, etc. Asimismo, tras el relato de los protagonistas y la reconstrucción de fuentes primarias se hace evidente la ausencia de vínculos orgánicos entre los movimientos sociales abordados en una escala transnacional. Una lectura de mediana duración y más detallada sobre la cuestión nos podría brindar respuestas a la pregunta por la articulación regional de la lucha de sectores subalternos organizados contra el neoliberalismo. También resulta vital indagar en las alianzas coyunturales con movimientos sociales que expresan una base programática diferente e incluso de signo político-ideológico contrario.

Finalmente, la pandemia por Covid-19 ha modificado todos los ámbitos de la vida. Se presenta de interés indagar, no solo en las formas en que se ha transformado la acción colectiva en contexto de restricción de la circulación en el espacio público, sino también en las consecuencias en las demandas de los NMS y en la posición de estos respecto de las políticas sanitarias y económicas para su superación.

Bibliografía

ABC Color (7 de enero de 2015). Sectores campesinos y de izquierda constituirán un frente contra Cartes. <https://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/sectores-campesinos-y-de-izquierda-constituiran-un-frente-contra-cartes-1324463.html>.

Anderson, Perry (2020). *Brasil: una excepción. 1964-2019* (Vol. 79). Madrid: AKAL.

Archila, Mauricio (2012). El movimiento estudiantil en Colombia. Una mirada histórica. *Revista del Observatorio Social de América Latina*, 31, 71-103.

Ávila Martínez, Ariel, & Morales Pérez, Isaac (2021). Nuevas derechas en Colombia. *Dossier El progresismo y la izquierda ante la nueva derecha: claves para la región*. Friedrich-Ebert-Stiftung.

Barragan Manjón, Melany, et.al. (2020). América Latina 2019: Vuelta a la inestabilidad. *Iberoamericana*, 20(73), 205-241.

Billion, Didier y Ventura, Cristophe (2020). ¿Por qué protesta tanta gente a la vez? *Revista Nueva Sociedad*, 286. <https://nuso.org/articulo/por-que-protesta-tanta-gente-la-vez/>

Bloch, Marc (1992). Por una historia comparada de las sociedades europeas. En Gigi Godoy y Eduardo Hourcade (comps.), *March Bloc. Una historia viva* (pp. 63-98). Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.

Bringel, Breno (2017). Crisis política y polarización en Brasil: De las protestas de 2013 al golpe de 2016. En Breno Bringel Geoffrey Pleyers (eds.), *Protesta e indignación global. Los movimientos sociales en el nuevo orden mundial* (pp. 141-154). Buenos Aires/Río de Janeiro: CLACSO/FAPERJ.

Bringel, Breno (2020). Geopolítica de la pandemia, escalas de la crisis y escenarios en disputa. *Geopolítica(s). Revista De Estudios Sobre Espacio y Poder*, 11 (Especial), 173-187.

Bringel, Breno y Falero, Alfredo (2016). Movimientos sociales, gobiernos progresistas y Estado en América Latina: transiciones, conflictos y mediaciones. *Caderno CRH*, 29. 27-45.

Bruckmann, Monica y Dos Santos, Theotonio. (2005). Los movimientos sociales en América Latina: un balance histórico. *Seminário Internacional REG GEN: Alternativas Globalização*, 8.

Calderón, Fernando y Jelin, Elizabeth (1987). *Clases y movimientos sociales en América Latina: perspectivas y realidades*. Buenos Aires: Centro de Estudios de Estado y Sociedad.

Campanha Latina (Septiembre 2021). Información. [Página web de la organización]. <https://campanhademulher.org/campanha-latina/>

Canese, Ricardo (2015). La restauración neoliberal de Cartes, en crisis. En Carbone, Rocco y Soler, Lorena (eds.) *Des-Cartes. Estampas de las derechas en Paraguay* (pp. 57-72). Buenos Aires: Punto de Encuentro.

Carrera Damas, Germán (1999). La conciencia criolla es el producto más auténtico y genuino de la relación de dominación en América Latina. Entrevista de Waldo Ansaldi. *Cuadernos del CISH*, 4 (5), 153-177.

Casas Mogollón, Paula (16 de enero de 2019). Claves para entender el movimiento estudiantil. *El Espectador*. <https://www.elespectador.com/educacion/claves-para-entender-el-movimiento-estudiantil-article-834347/>

Casullo, Ma. Esperanza (2019). *¿Por qué funciona el populismo?: El discurso que sabe construir explicaciones convincentes de un mundo en crisis*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

Cepeda Másmela, Carolina (2018). Protesta social y participación política: Los riesgos de la incompreensión. *Cien Días vistos por Cinep*, 94, 38-42.

Congreso Democrático del Pueblo (febrero 2015). Información. *Facebook*. <https://www.facebook.com/congresodemocraticodelpueblo/>

Congreso Democrático del Pueblo (junio 2015). Información. [Página web oficial]. <https://congresodemocraticodelpueblo.wordpress.com/acerca-de/>

Domingues, José (2016). À esquerda no nevoeiro: Trajetórias, desafios e possibilidades. *Novos estudos CEBRAP*, 35 (3), 85-101.

Escobar, Arturo, Álvarez, Sonia y Dagnino, Evelina (2001). *Política cultural y cultura política. Una nueva mirada sobre los movimientos sociales latinoamericanos*. Caracas: Taurus/ICANH.

García Linera, Álvaro, Chavez Leon, Marxa y Costa Monje, Patricia (2010). *Sociología de los movimientos sociales en Bolivia: estructuras de movilización, repertorios culturales y acción política*. La Paz: NCCR Norte-Sur/Plural Editores.

Garretón, Antonio M. (2001). Cambios sociales, actores y acción colectiva en América Latina. *Serie Políticas Sociales*, 56. Santiago de Chile: CEPAL

Gentili, Pablo (2018). Marielle Franco y el futuro de Brasil. Esperanza o barbarie. En Campoalegre, Rosa (ed.), *Afrodescendencias: Voces en resistencia* (pp. 237-243). Buenos Aires: CLACSO.

Goldstein, Ariel (2016). La tormenta perfecta: Crisis e impeachment en el segundo mandato de Dilma Rousseff. *Análisis político*, 29(88), 90-104.

Goldstein, Ariel (2020). *Bolsonaro: La democracia de Brasil en peligro*. Buenos Aires: Marea Editorial.

Lachi, Marcello (2015). El “Nuevo Rumbo” o Proceso de reestructuración del modelo socioeconómico paraguayo. En Carbone, Rocco y Soler, Lorena (eds.), *Des-Cartes. Estampas de las derechas en Paraguay* (pp. 243-278). Buenos Aires: Punto de Encuentro.

Leal Buitrago, Francisco (1988). La profesionalización de los estudios políticos en Colombia. *Análisis Político*, 3, 49-62.

Luna, Juan Pablo y Kaltwasser, Cristóbal R. (eds.) (2014). *The resilience of the Latin American right*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Lustig, Nora (2020). Desigualdad y descontento social en América Latina. *Revista Nueva Sociedad*, 286. <https://nuso.org/articulo/desigualdad-y-descontento-social-en-america-latina/>

Martinez Escobar, Fernando (2013). El eje izquierda-derecha en el sistema de partidos políticos del Paraguay. *Revista Paraguay desde las Ciencias Sociales*, 2, 1-26. <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/26541>

Mercado, Ana Belén (2017). *Think tanks, democracia y partidos políticos*. El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga durante la reforma constitucional colombiana (1986-1992). *Millcayac-Revista Digital de Ciencias Sociales*, 4(7), 49-70.

Modonesi, Massimo (2008). Crisis hegemónica y movimientos antagonistas en América Latina. Una lectura gramsciana del cambio de época. *A Contracorriente: una revista de estudios latinoamericanos*, 5(2), 115-140.

Molinier, Lila (2015). Paraguay. El retorno neoliberal. Avances y tensiones de un proyecto más dependiente y desigual. En Luis Rojas Villagra (Coord.), *Neoliberalismo en América Latina. Crisis, tendencias y alternativas* (pp. 173-202). Buenos Aires: CLACSO.

Morínigo, José (2002). La transición circular. *NovaPolis*, 1, 4-20. <http://novapolis.pyglobal.com/pdf/novapolis1.pdf#page=4>

Mulheres Unidas Contra Bolsonaro. (Septiembre 2021). Información. [Facebook]. <https://www.facebook.com/groups/grupomucb/>

Mulheres Unidas Contra Bolsonaro. Ludimilla Teixeira. (17 de Septiembre 2018) [YouTube]. <https://www.youtube.com/watch?v=gE8eLBv1UWY>

Natalucci, Ana y Ferrero, Juan Pablo (2021). Repensando la nueva dinámica sociopolítica en Argentina y Brasil, 2011-2016. *Estudios Políticos*, 60, 326-349.

Nikolajczuk, Mónica (2018). De la construcción de Itaipú a la política energética cartista. Los mecanismos de acumulación por desposesión en Paraguay (1973-2017). *Revista e-l@tina*, 17, (65), 33-49.

Observatorio Electoral de América Latina - OBLAT (2020). *Políticas públicas en América Latina frente al Covid-19*. Buenos Aires: Facultad de Ciencias Sociales, UBA. <http://www.sociales.uba.ar/wp-content/blogs.dir/219/files/2020/03/OBLAT-COVID1FINAL.pdf>

Palacios-Valladares, Indira (2020). Chile 2019: las protestas de octubre y el movimiento estudiantil ¿coyuntura histórica de cambio? *Revista de ciencia política* (Santiago), 2(40), 215-234.

Palau, Marielle (2002). Luchas sociales obligan a retroceder al gobierno y detienen el proceso de privatización. *Observatorio Social*

de América Latina, 8. Buenos Aires: CLACSO. Disponible en <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal8/palau.pdf>

Palau, Marielle (2014). *Movimiento popular y democracia*. Asunción: BASE Investigaciones Sociales.

Palau, Marielle; Irala, A.; Coronel, Cristina y Yuste, Juan Carlos (2018). *Canalización de demandas de los Movimientos Sociales al Estado paraguayo*. Asunción: CONACYT.

Prego, Florencia (2021). *Democracia y estado de excepción en Paraguay (1992-2012)*. Tesis de Maestría. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

Ramírez Gallegos, Franklin et. al. (2020). *Octubre y el derecho a la resistencia*. Buenos Aires: CLACSO.

Rebón, Julián y Ruiz Encina, Carlos (2020). Revueltas en y contra el neoliberalismo. Argentina, 2001 y Chile, 2019. *Revista Sociedad*, 40, 157-173.

Rocca Rivarola, Dolores (2020). Las mutaciones históricas del antipetismo y el fenómeno Bolsonaro. *Perseu: História, Memória e Política*, 19, 244-283.

Rodríguez, Gina Paola (2014). Uribe y Santos: ¿una misma derecha? *Nueva Sociedad*, 254. <https://nuso.org/articulo/alvaro-uribe-y-juan-manuel-santos-una-misma-derecha/>

Rodríguez, Gina Paola (2018). Entre la guerra y la paz. La política colombiana en el cambio de siglo (1990-2018). En Marcela Cristina Quinteros y Luiz Felipe Viel Moreira (orgs.), *As revoluções na América latina contemporânea: Os desafios do século XXI* (pp. 25-62). San José/Maringá: UEM-PGH-História/UCR/CIHAC.

Salas Oroño, Amílcar (2016). La democracia brasileña en entredicho: El golpe institucional a Dilma Rousseff. *Revista Paraguaya de Sociología*, 52(147), 57-61.

Sánchez, José; Bozzolasco, Ignacio y Escobar, Fernando (2020). *La izquierda paraguaya y sus estrategias*. Buenos Aires: Teseo.

Santos, Boaventura De Sousa (2001). Los nuevos movimientos sociales. *OSAL: Observatorio Social de América Latina*, 5, 177-188.

Scargiali, Enzo Andrés (2020a). Las políticas de Estado en Ciencia y Tecnología en el marco de los procesos de integración regional en América Latina. *Revista el@ tina*, 18 (71), 37-50.

Scargiali, Enzo Andrés (2020b). Entre la ciencia y la política. La Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia frente al gobierno de Collor de Mello (1990-1991). *Argumentos. Revista de Crítica Social*, 22, 341-365.

Skocpol, Theda (1994). *Social revolutions in the modern world*. Cambridge University Press.

Soler, Lorena (2020). Populismo del siglo XXI en América Latina. *Estado e' comunes, revista de políticas y problemas públicos*, 1(10), 17-36.

Soler, Lorena (2021). Derechas: acercamientos conceptuales entre lo “viejo” y lo “nuevo”. *Dossier El progresismo y la izquierda ante la nueva derecha: claves para la región*. Friedrich-Ebert-Stiftung. <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/uruguay/17853-20210517.pdf>

Soler, Lorena y Torre, Gustavo (2015). Balance del gobierno del empresario Horacio Cartes en Paraguay. *Celag: Análisis político*. <https://www.celag.org/balance-del-gobierno-del-empresario-horacio-cartes-en-paraguay/>

Soler, Lorena, y Prego, Florencia (2020). The Right and Neo-Golpismo in Latin America. A Comparative Reading of Honduras (2009), Paraguay (2012), and Brazil (2016). En Bianchi, Bernardo, Chaloub, Jorge; Rangel, Patricia y Wolf, Frieder (eds.), *Democracy and Brazil: collapse and regression* (pp. 61-78). Nueva York/Londres: Routledge.

Svampa, Maristella (2010). Movimientos Sociales, Matrices socio-políticas y nuevos escenarios políticos en América Latina. *OneWorld Perspectives*, 1.

Sztompka, Piotr (1995). *Sociología del cambio social*. Madrid: Alianza.

Tarrow, Sidney (1997). *El poder en movimiento*. Madrid: Alianza.

Tilly, Charles (1991). *Grandes estructuras, procesos amplios, comparaciones enormes*. Madrid: Alianza.

Tilly, Charles y Wood, Lesley (2009). *Los movimientos sociales: 1768-2008*. Barcelona: Crítica.

Touraine, Alain (2006). Los movimientos sociales. *Revista colombiana de sociología*, 27, 255-278.

Última Hora (1 de marzo de 2015). Sectores de izquierda oficializan plataforma anti-cartista <https://www.ultimahora.com/sectores-izquierda-oficializan-plataforma-anti-cartista-n876569.html>

Última Hora (2 de marzo de 2015) Centro Democrático del Pueblo se lanza como bloque opositor. <https://www.ultimahora.com/centro-democratico-del-pueblo-se-lanza-como-bloque-opositor-n876699.html>

UNEES Colombia [@unees.col] (14 de febrero de 2019). Por nuestros líderes y lideresas sociales... [Instagram]. <https://www.instagram.com/p/Bt3V1tzg71C/?igshid=1qggs01lm251w>

UNEES Colombia [@UNEESCol]. (09 de octubre de 2018). Declaración Política del I Encuentro Nacional de Delegados/as de la UNEES. Twitter. <https://twitter.com/uneescol/status/1049512314427400194?s=21>

Zibechi, Raúl (2016). Lenta fragua de un nuevo ciclo en Brasil. En Gentili, Pablo (ed.), *Golpe en Brasil* (pp. 139-142). Buenos Aires: CLACSO.